

Los impactos socioambientales de la soja en Paraguay



Investigadores participantes del informe:

Tomás Palau
Guillermo Ortega
Luis Rojas Villagra
Milena Pereira
Richard Doughman



BASE Investigaciones Sociales
Ayolas 807 esq. Humaitá. Tel: (595-21) 451 217. Fax: (595-21) 498 306
baseis@baseis.org.py
www.baseis.org.py
Asunción, Paraguay

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo solidario de la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y Reporter Brasil.



Primera Edición
Los impactos socioambientales de la soja en Paraguay
(Asunción, BASE IS, julio 2012).

- © Copyleft.
- Ⓘ Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. Está permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones.
- 👤 Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autor, editorial, año).
- 🚫 No comercial: se permite la utilización de esta obra con fines no comerciales.
- ⚖️ Mantener estas condiciones para obras derivadas: Sólo está autorizado el uso parcial o alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

Las opiniones vertidas en esta publicación no necesariamente reflejan la posición de los editores, y son de exclusiva responsabilidad del autor.

Contenido

Contenido.....	3
Presentación.....	5
Importancia de la soja para el PIB paraguayo y en general para la economía.....	7
Generación de empleos por el sector	10
Principales empresas sojeras en el país	12
Principales vectores para la expansión de la soja en el país.....	14
Impactos de la expansión de la soja en el Paraguay	18
Impactos ambientales: la deforestación.....	19
Carbón vegetal usado en Brasil incentiva la deforestación	22
Contaminación por agrotóxicos a trabajadores, al agua y a la tierra.....	27
Violación a los derechos de los trabajadores y de los indígenas por el agronegocio.....	32
El caso de los indígenas de Campo Agua'ẽ	36
Conflictos agrarios generados por la expansión de la soja	41
Soja concentra tierra en Paraguay y en Brasil	43
Movimientos sociales y ONGs que actúan para denunciar los impactos.....	45
Presionados, campesinos luchan por garantizar sobrevivencia.....	46
Mujeres en riesgo.....	47
Asentamientos en disputa	49
Resistencia campesina.....	52
Salidas y propuestas	53



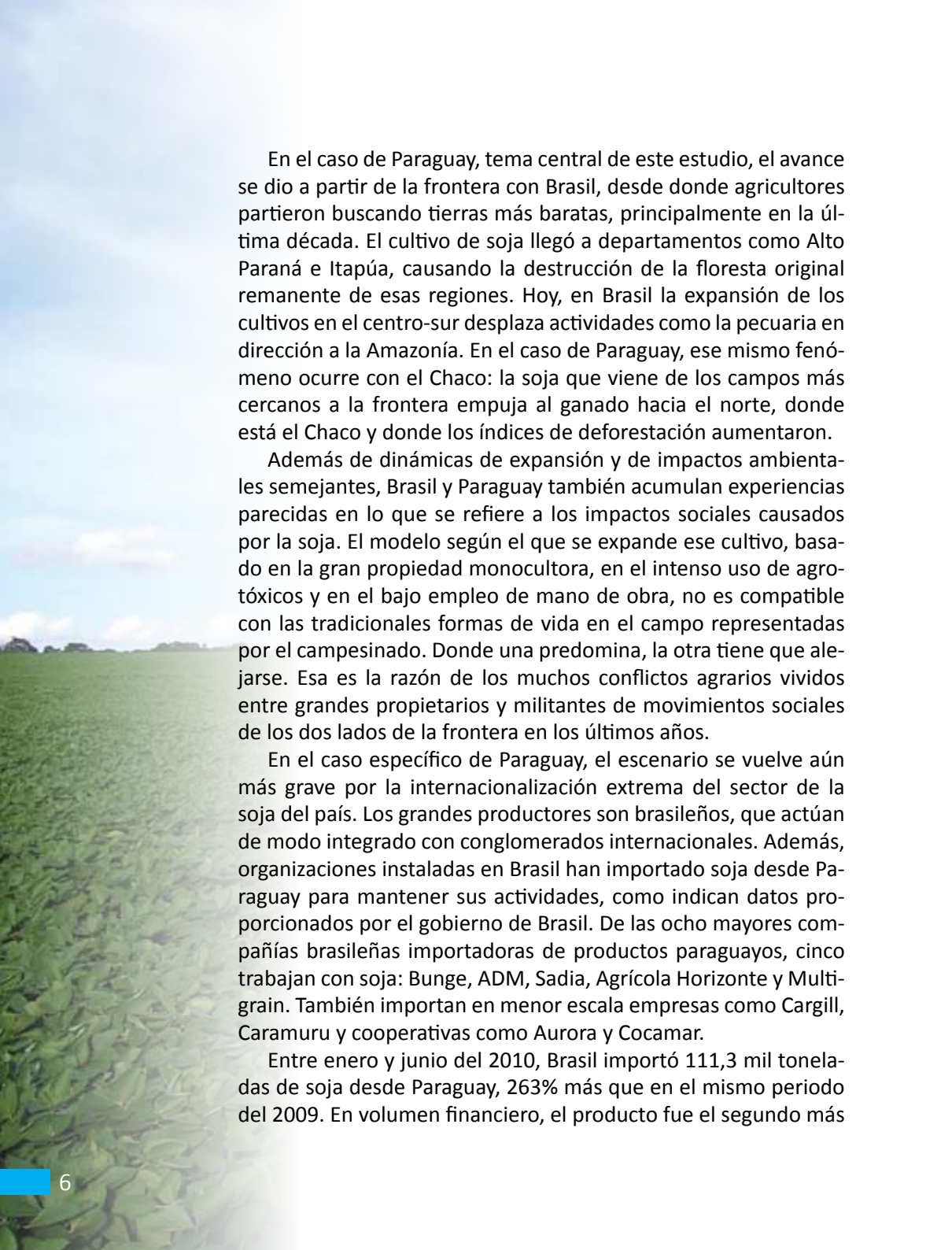
Presentación

Se estima que Brasil, Argentina y Paraguay terminarán la zafra de soja 2009/10 con una espantosa marca: los tres países serán responsables por el 50% de la producción mundial de ese grano. La cosecha esperada por ellos en conjunto es de 130,7 millones de toneladas, ante una producción global de 259,7 millones de toneladas. Brasil se destaca con 69,0 millones de toneladas cosechadas (26,5% del total mundial), y es el segundo mayor productor global, atrás apenas de los Estados Unidos, país que cosecha 91,4 millones (35,1%). Argentina es el tercer mayor productor, con 54,5 millones (20,9%), y Paraguay es el sexto, con 7,2 millones (2,7%), atrás solamente de China y de la India⁽¹⁾.

Con esa posición en el ajedrez de la agricultura mundial, los vecinos del Mercosur se consolidan como los grandes proveedores de soja para la industria alimenticia internacional, sobre todo la relacionada con la producción de carnes. La mayor parte de la cosecha se exporta en forma de granos, harina y aceite a China, Japón y la Unión Europea. En esta zafra, las cantidades son las siguientes: Brasil prevé exportar 42 millones de toneladas, lo equivalente a 60,8% de su producción; Argentina otros 40 millones, 73,5% del total cosechado; y Paraguay 5,6 millones, que representan 77,7% de los granos producidos.

La expansión del cultivo de soja en los tres países tiene varias explicaciones, que pasan por el clima favorable, el desarrollo de variedades locales, la presencia de una cultura agropecuaria y de políticas públicas favorables a la expansión de la frontera agrícola. Pero un factor se destaca históricamente: el bajo precio relativo de la tierra. Es esta variable económica la que ha permitido a agricultores de la región atender al aumento de la demanda mundial por soja. En Brasil, la ocupación de tierras baratas permitió la expansión de los cultivos del sur en dirección al norte, sobre todo hacia las regiones de Cerrado, a partir de los años setenta.

⁽¹⁾ Informe: Departamento de Agricultura - Estados Unidos.



En el caso de Paraguay, tema central de este estudio, el avance se dio a partir de la frontera con Brasil, desde donde agricultores partieron buscando tierras más baratas, principalmente en la última década. El cultivo de soja llegó a departamentos como Alto Paraná e Itapúa, causando la destrucción de la floresta original remanente de esas regiones. Hoy, en Brasil la expansión de los cultivos en el centro-sur desplaza actividades como la pecuaria en dirección a la Amazonía. En el caso de Paraguay, ese mismo fenómeno ocurre con el Chaco: la soja que viene de los campos más cercanos a la frontera empuja al ganado hacia el norte, donde está el Chaco y donde los índices de deforestación aumentaron.

Además de dinámicas de expansión y de impactos ambientales semejantes, Brasil y Paraguay también acumulan experiencias parecidas en lo que se refiere a los impactos sociales causados por la soja. El modelo según el que se expande ese cultivo, basado en la gran propiedad monocultora, en el intenso uso de agrotóxicos y en el bajo empleo de mano de obra, no es compatible con las tradicionales formas de vida en el campo representadas por el campesinado. Donde una predomina, la otra tiene que alejarse. Esa es la razón de los muchos conflictos agrarios vividos entre grandes propietarios y militantes de movimientos sociales de los dos lados de la frontera en los últimos años.

En el caso específico de Paraguay, el escenario se vuelve aún más grave por la internacionalización extrema del sector de la soja del país. Los grandes productores son brasileños, que actúan de modo integrado con conglomerados internacionales. Además, organizaciones instaladas en Brasil han importado soja desde Paraguay para mantener sus actividades, como indican datos proporcionados por el gobierno de Brasil. De las ocho mayores compañías brasileñas importadoras de productos paraguayos, cinco trabajan con soja: Bunge, ADM, Sadia, Agrícola Horizonte y Multi-grain. También importan en menor escala empresas como Cargill, Caramuru y cooperativas como Aurora y Cocamar.

Entre enero y junio del 2010, Brasil importó 111,3 mil toneladas de soja desde Paraguay, 263% más que en el mismo periodo del 2009. En volumen financiero, el producto fue el segundo más

importado por los brasileños, quedando atrás solamente del trigo. Esas conexiones de las cadenas productivas ayudan a explicar por qué el complejo de la soja permanece en su fase más primaria en Paraguay. Mientras que Brasil procesa 46,3% de su producción de soja en el propio país y Argentina un 63,3%, en Paraguay ese índice es de sólo un 20,8%. Con eso, el país agrega aún menos valor a sus ventas externas en comparación con los otros vecinos, que exportan más harina y aceite.

A lo largo de este estudio, Base Investigaciones Sociales y ONG Repórter Brasil, colaboradoras en este trabajo, presentan a sus lectores un análisis amplio sobre el complejo de la soja en Paraguay, sus aspectos económicos y sus implicaciones socioambientales. Hacen, sobre todo, una lectura crítica de la realidad a partir de la perspectiva de aquellos que presencian la expansión del cultivo, pero no son beneficiados por ella –los campesinos que son expulsados de sus tierras, los indígenas que tienen sus cultivos contaminados y los trabajadores cuya fuerza de trabajo es explotada.

Importancia de la soja para el PIB paraguayo y en general para la economía

En la última década, la soja se ha convertido en el principal rubro producido por la economía paraguaya, así como en el mayor producto de exportación. A partir de su ingreso al país en la década del setenta en la frontera Este, lindante con Brasil, su crecimiento ha sido sostenido y en algunos periodos se ha acelerado, en especial en los últimos diez años, como resultado de la introducción de material genético modificado.

En el país, el sector primario de la economía representa en el primer trimestre de 2010, aproximadamente el 26% del PIB, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por su parte, el sector industrial y la construcción, abarcan sólo un 17%, lo que denota el escaso desarrollo de los procesos industriales en el Paraguay. El sector terciario o de servicios genera el 50%

del PIB. Específicamente, la actividad agrícola representa el 20% incluyendo a la agricultura mecanizada y a la tradicional.

Principales rubros agrícolas / Zafra 2009 – 2010

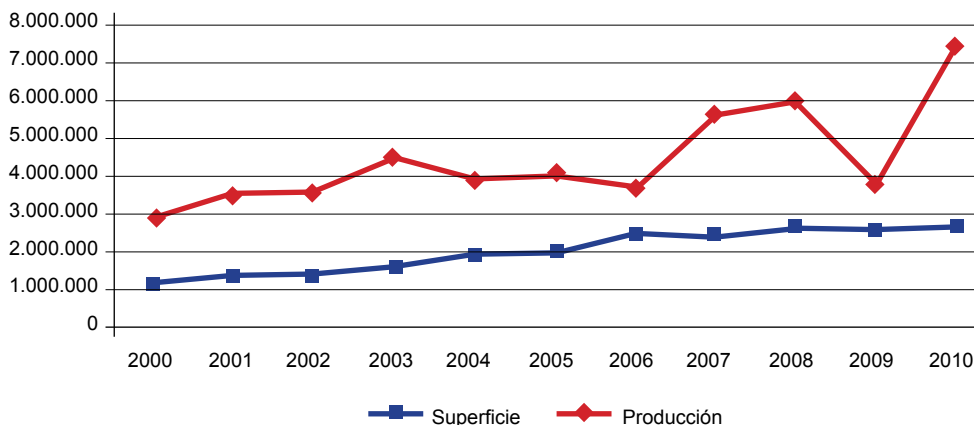
Rubros	Superficie Has	Producción Ton
Soja	2.682.000	7.500.000
Maíz	650.000	1.625.000
Trigo	560.800	1.261.800
Mandioca	250.000	3.625.000
Girasol	150.000	255.000

Fuente: MAG

Al observar los cinco principales productos agrícolas según la superficie cultivada, se observa que cuatro corresponden principalmente a la agricultura mecanizada, y sólo uno es característico de la actividad campesina, la mandioca. La soja ocupa el primer lugar con 2,6 millones de has, seguido del maíz y el trigo. La producción de la oleaginosa es el renglón estrella del agronegocio,

Evolución del área sembrada en superficie, producción y productividad

Evolución superficie y producción de soja En Has. y Ton. Periodo 2000-2010



y sus promotores apuntan a seguir aumentando su peso en la economía en los próximos años. En el año 2000 se cultivaron 1,2 millones de has de soja, tomando un renovado impulso con la introducción en el Paraguay de las semillas genéticamente modificadas por las corporaciones transnacionales. En el año 2006 se duplicó esta superficie, superando las 2,4 millones de has. En la última zafra se cultivaron 2,7 millones de has.

La producción ha marcado un récord en el 2010, llegando a 7,5 millones de toneladas, frente a 3,6 millones del 2009, año fuertemente influenciado por la sequía en toda la región. Diez años atrás, la producción se situaba en torno a los 3 millones de toneladas.

Productividad

Año	Kls/Ha.
2000	2.426
2001	2.594
2002	2.454
2003	2.915
2004	2.020
2005	1.501
2007	2.297
2008	2.257
2009	1.445
2010	2.792

Fuente: CAPECO

El rendimiento ha tenido altos y bajos en la última década. En el 2000 fue de 2,4 ton. por ha, mientras que en el presente año alcanzó las 2,7 ton. por ha. El pico histórico se alcanzó en el 2003, con casi 3 ton. por ha. De igual forma hubo años de muy baja productividad, como el 2006 y el 2009 con apenas 1,5 ton. por ha. En general no se observa una mejoría sustancial en la productividad de la soja a largo plazo, a pesar de la intensiva utilización de agroquímicos y fertilizantes en su proceso productivo.

Generación de empleos por el sector

En cuanto al empleo, el Paraguay contaba con una Población Económicamente Activa (PEA) de 2.981.126 personas en el 2008. El proceso de inserción subordinada al comercio mundial ha hecho que el Paraguay se especialice en la producción de algunos commodities capital-intensivos, de escasa demanda de trabajo en sus procesos productivos, por lo que la población campesina ha sido progresivamente desplazada hacia los cordones urbanos. En 1992, la población urbana supera por primera vez a la rural, dada la permanente migración por efectos de la expansión del modelo agroexportador, y como el sector industrial es limitado en la generación de empleos, el sector terciario, donde predominan actividades informales de escasa remuneración, se fue incrementando de forma acelerada.

La tecnología del cultivo de soja mecanizada no genera empleo de mano de obra. Una única persona puede encargarse de 200 hectáreas y su salario podría alcanzar un máximo de 1.500.000 guaraníes⁽²⁾. En el cultivo de la soja, en algunos casos los peones son paraguayos, porque al productor le conviene tener buena relación con la comunidad, pero en la mayoría de los casos, los productores brasileños traen su mano de obra del Brasil y pagan salarios mínimos para la sobrevivencia. Anteriormente, en los años 90, el cultivo de la soja empleaba mayor cantidad de mano de obra. El productor generaba una fuente de ingreso, le daba trabajo al vecino, al amigo, al hijo, pero ahora, con el avance tecnológico que se ha desarrollado, esa fuente de empleo que anteriormente había, ha finalizado⁽³⁾. En el sector primario se ubicaba (2008) el 26% de la PEA, con casi 800 mil personas; en el secundario el 18%, mientras que en el terciario el 55% de los trabajadores, con más de 1,6 millones de personas. En este último sector se incluyen los trabajos por cuenta propia, la venta informal, los servicios domésticos, los trabajadores del Estado y los comerciantes.

⁽²⁾ 1 U\$S equivale a Gs. 4.700.

⁽³⁾ Entrevista a un dirigente campesino de Alto Paraná.



En el Paraguay el 40% de la población sigue siendo rural, y la PEA en este sector está conformada por 1.206.226 personas. Según el último censo agropecuario realizado en el año 2008, los productores de soja en todo el país son 27.735, lo cual representa menos del 3% de la PEA rural. Los monocultivos de soja generan pocos empleos para la economía, tanto en la etapa productiva, por la alta concentración de la tierra en esta actividad, como en las tareas de provisión de insumos tecnológicos, el acopio y la exportación. Estas tareas están controladas por transnacionales, que con relativamente pocos empleados, obtienen elevadas ganancias por la importación de insumos y la exportación de la soja. Las principales transnacionales son: Cargill, con 380 empleados en el país, ADM con 450, luego Bunge, Dreyfus, entre otras con similar cantidad de trabajadores.

La implementación del paquete tecnológico de las semillas de soja transgénica y la mecanización de los monocultivos, han implicado una reducción drástica en la oferta de trabajo en las regiones sojeras. Según un funcionario de Minga Porá “antes de la mecanización, 25 años atrás, 100 hectáreas significaban 100 personas para carpir, hoy en día ya nadie va a carpir, entonces no trabaja más esa gente”. Las comunidades cuyo mercado de trabajo ha sido más afectado por el ingreso de la soja, según entrevistas realizadas, son las comunidades del departamento de Alto Paraná e Itapúa, pues son los departamentos en los que el cultivo de la soja está más consolidado. En la mayoría de las comunidades, la situación es bastante negativa, la percepción de disminución de mano de obra supera el 60% en todas ellas.

Muy ligada a la escasez de mano de obra que se genera con el modelo de producción agroempresarial, se presenta el fenómeno de la concentración de la riqueza. En la Intendencia de Minga Porá⁽⁴⁾ constatan que los beneficios generados por el cultivo de soja son acaparados por unos pocos agricultores (en su mayoría brasileños) y los silos de la zona (en su mayoría de empresas multinacionales). El aumento de la migración se debe a la falta de

⁽⁴⁾ Localidad ubicada a menos de 40 km de la frontera con Brasil.



oportunidades de trabajo. El funcionario declara “los silos emplean a mano de obra temporalmente, lo que no significa una gran cantidad de trabajo para la gente del distrito. La soja es el principal contribuyente económico para el distrito, pero de hecho no implica generación de fuentes de trabajo”.

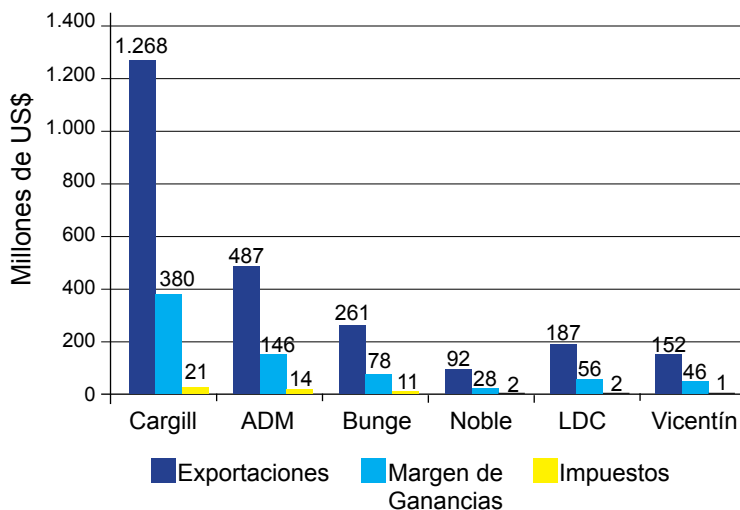
Los silos sólo dan empleo en determinados meses, entre diciembre y marzo cuando se cosecha la soja. Los silos no emplean trabajadores mayores de 30 años, ya que solamente requieren jóvenes con buena condición física para hacer fuerza y realizar el trabajo rápidamente. Un dirigente joven de Lote 8⁽⁵⁾ lo define como “una explotación directa de los jóvenes”. En la comunidad de Parirí, en Caaguazú, en la temporada alta llegan a trabajar 22 jóvenes de la comunidad en los silos del pueblo de Toledo. El trabajo es muy agotador; el promedio de descarga es de 1.000 toneladas al día y la jornada laboral es de por lo menos 10 horas diarias. Las tareas incluyen descarga, selección de granos, y alimentación de los hornos para el secado. Las condiciones de salud son deficientes, una gran parte de los trabajadores presentan problemas respiratorios debido al polvillo y los agrotóxicos de los granos. La paga es de 30 mil guaraníes diarios (alrededor de U\$S 6).

Principales empresas sojeras en el país

Las principales empresas beneficiadas por la producción de soja son las corporaciones extranjeras, pues son importadores de los insumos y exportan casi la totalidad de los granos y los derivados, como aceite y harina. La principal es la norteamericana Cargill, que en el 2008 exportó por valor de 1.268 millones de dólares, seguida por ADM con 487 millones, y Bunge con 261 millones. Las mismas manejan un amplio margen de ganancias, por encima del 30% de sus facturaciones, y dado el débil régimen impositivo en el sector, aportan escasos recursos al Estado por sus actividades económicas.

⁽⁵⁾ Comunidad próxima a Minga Porá.

Principales exportaciones de soja y derivados Exportaciones, Ganancias e Impuestos-2008



En el nivel productivo, predominan los cultivos en grandes propiedades. En el 2008, el promedio nacional de superficie por productor de soja fue de 90 has. Pero la concentración del cultivo en las grandes propiedades es muy notoria. Las propiedades de más de 1.000 has representan el 44% de la superficie sojera, mientras que las fincas cuyo tamaño varía entre 100 y 1.000 has abarcan el 43%. El restante 13% de las fincas corresponde a las de menos de 100 has. Entre los principales productores se encuentra el brasileño Tranquilo Favero, con más de 50.000 has de soja, la Cooperativa Colonias Unidas ubicada en el departamento de Itapúa, con más de 100.000 has. La mayor parte de la superficie se encuentra en manos de brasileños, cerca del 80% en toda la frontera Este, más los departamentos de San Pedro y Caaguazú. Además existen muchas empresas brasileñas en la provisión de semillas, agroquímicos y tractores, como las empresas del Grupo Favero, Agrofertil, Agrotec, Agrosan, Dekalpar, y las cooperativas de colonos brasileños agrupadas en la Central Nacional de Cooperativas UNICOOP.

Principales vectores para la expansión de la soja en el país

La soja se produce fundamentalmente para la exportación, el consumo interno no supera el 5% del total. El principal destino es la exportación en grano, sin mayor valor agregado, en un porcentaje que se mantiene cercano al 70% en la última década. La industrialización en aceites y pellets se mantiene en un 30%. En el 2010 se va a marcar un récord en la exportación de soja, pues sólo en los primeros cinco meses del año se exportó por un valor mayor a todo el 2009.

Destino de la producción de soja Periodo 2000-2009

AÑO	Exportaciones	Eportación	Industrialización
	En grano-Ton	%	%
2000	2.025.552	71	28
2001	2.509.948	72	26
2002	2.385.979	67	31
2003	3.167.193	70	28
2004	2.664.415	68	30
2005	2.882.182	71	27
2006	2.380.344	65	32
2007	4.136.177	74	23
2008	4.439.166	74	22
2009	2.282.705	63	34

Fuente: CAPECO

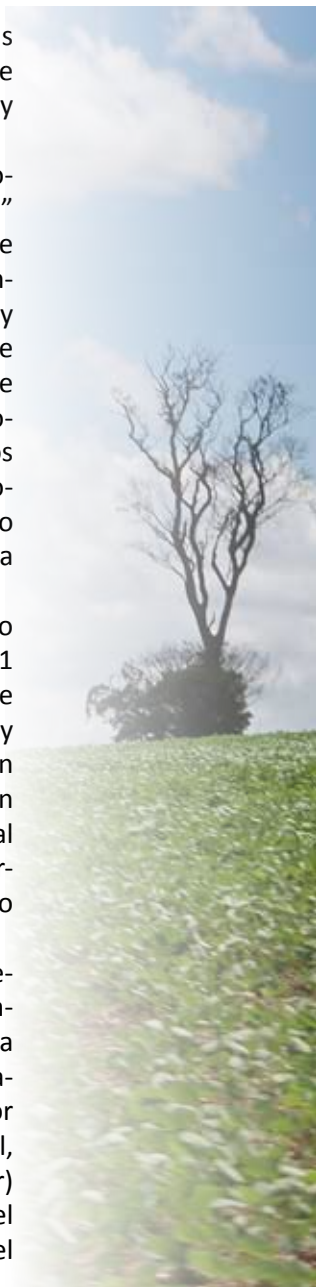
El consumo interno de esta oleaginosa y sus derivados en el país es muy limitado, pues es un producto no tradicional, ajeno a las costumbres y la cultura alimentaria de la población paraguaya. El consumo interno no supera el 5% del total, pues casi el 75% de la producción es enviado al exterior en granos, mientras que la mayor parte de los derivados industriales como el aceite y harina, también tienen como objetivo el mercado internacional. En el país ha habido programas, tanto de empresas privadas como de instituciones estatales, que han promovido la adopción de hábi-

tos alimentarios a partir de la soja, como la donación de “vacas mecánicas” a escuelas de escasos recursos para la elaboración de “leche” de soja. Estos intentos no han tenido mayor resultado, y el consumo local de la soja sigue reducido.

Otro potencial vector para la expansión de la soja es el biodiesel. La Ley Nº 2748/05, de “Fomento de los agrocombustibles” es actualizada y reglamentada el 27 de abril de 2006 y establece que los agrocombustibles son de “interés nacional”. Los agrocombustibles beneficiados por la ley son: biodiesel, etanol absoluto y etanol hidratado. Se dice en ella “que es necesario establecer e impulsar programas que favorezcan la localización de empresas e industrias en nuevos polos de desarrollo en el país, bajo el enfoque de cadenas productivas y clusters”. Por lo tanto, los proyectos de inversión para producir agrocombustibles en las áreas agrícolas, pecuarias o industriales, promovidos por personas físicas o jurídicas en el país, gozarán de los beneficios establecidos por la ley N 2748/ 05.

La ley establece que el Ministerio de Industria y Comercio inicie medidas obligatorias de mezcla de biodiesel con gasoil (1 al 5%), y alcohol con nafta, para asegurar el mercado mediante el incremento de la demanda. Se aseguran incentivos de la ley 60/90 de Inversiones y se promueve el acuerdo de cooperación con Brasil. El artículo 16 menciona específicamente la inclusión de los emprendimientos cuyos proyectos incluyan la mitigación al cambio climático de captura o remoción de gases de efecto invernadero, en el marco reglamentario del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Lo estipulado por la ley no se ha cumplido. La empresa petrolera estatal Petróleos Paraguayos (PETROPAR) es la mayor importadora —alrededor del 55%— de gasoil para uso interno; ni esta empresa ni las empresas privadas cumplen con las mezclas establecidas por la ley para evitar el alto precio que deben pagar por el aceite proveniente del sebo bovino. Según la empresa estatal, el precio de Gs. 3.706 (aproximadamente 0,80 centavos de dólar) no compensa su costo, por el actual precio del petróleo a nivel internacional. Es decir, a la empresa estatal le conviene vender el



gasoil sin aditivo, lo que hace que el biodiesel no pueda todavía comercializarse a nivel nacional.

El único convenio firmado por Paraguay es con el Brasil. En mayo de 2007, la visita del Pdte. Lula en el marco del Seminario de Agrocombustibles Brasil-Paraguay, concluyó con la firma del memorándum de entendimiento. El presidente brasileño estuvo acompañado de 30 empresarios y los alentó a que invirtieran en el Paraguay. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, anunció en dicho Seminario que contará con una línea de crédito específica para financiar a empresarios brasileños que decidan invertir en agronegocios en Paraguay. El documento firmado entre ambos gobiernos también incluyó intercambio y programas de cooperación en materia de obtención de nuevas variedades e incorporación de tecnologías más avanzadas de producción agrícola (sistemas de riego, fertilización, etc.).

Por otro lado, el grupo brasileño-portugués Espíritu Santo, visitó el Paraguay con las mismas intenciones. Este grupo cuenta con una empresa agroganadera ubicada en una reserva natural privada llamada Ypetí donde se encuentran poblaciones indígenas; esta empresa fue denunciada en 2009 por contaminación con agrotóxicos. También la fundación española Biocoms –que ya ha invertido en Argentina– ha visitado Paraguay, al igual que otros grupos de inversores de la India, como la Corporación Petroquímica Formosa y la Fair Energy, Grace THW Group (ambas de Taiwán), así como la Novamérica de Brasil, además de firmas de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y otros países europeos. También se anunció que el proyecto “Paraguay Vende 2”, que es un programa de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) de los Estados Unidos, pondrá énfasis en la producción de biocombustibles.

Empresas privadas productoras de biodiesel que funcionan en el país

Empresa	Lugar	Capacidad
Frigorífico Guaraní	Itaiguá, Dpto. Central	Producción: 12.000.000 litros/ mes de sebo bovino
Enerco	Areguá, Dpto. Central	Producción: 6.000.000 litros/ año de sebo bovino
Bioenergía SA. (austriaco-italiana)	Itaiguá, Dpto. Central	Producción: 4.000.000 litros/ año de sebo bovino
Bebo Porá SRL	Limpio, Dpto. Central	Producción: 6.000.000 litros/ año de sebo bovino
Quest SA	Luque, Dpto. Central	Producción: 1.800.000 litros/ año de aceite vegetal
Coop. Cosecha Feliz	Guarambaré, Dpto. Central	Producción: 1.500.000 litros/ año de aceite vegetal
Frigorífico Concepción SA	Concepción, Dpto. Concepción	Producción: 9.000.000 litros/ año de sebo bovino
Bio-Paraguay SA	Ytakyry, Dpto. Alto Paraná	Producción: 1.200.000 litros/ año
Agro Silo Santo Angelo AS	Ñacunday, Dpto. Alto Paraná	Producción: 1.800.000 litros/ año de aceite vegetal
Agro GF SA	Paso Cadena, Dpto. Caaguazú	Producción: 1.800.000 litros/ año de aceite vegetal

Fuente:

<http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/bioenergia/pdf/colombia/01.pdf>

De estas diez empresas, cinco utilizan la grasa bovina para procesar el aceite que luego se mezcla con el gasoil. Las restantes, procesan el aceite vegetal pero en menor medida, porque no cuentan con suficiente cantidad para satisfacer la demanda de las empresas distribuidoras de combustibles. Todas estas empresas constituyen una Cámara de Productores de Biodiesel que se denomina BIOCAP (Cámara Paraguaya de Biodiesel), que está representada en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX). Todas las empresas nacionales e internacionales que invierten en la producción

de agrocombustible tienen ventajas comparativas con respecto a otros rubros, por cuanto que no pagan el mismo canon que las demás empresas.

Impactos de la expansión de la soja en el Paraguay

El modelo de producción sojera –que se suma a los grandes latifundios ganaderos preexistentes– está concentrando en pocas manos las tierras cultivables del país y expulsando a agricultores e indígenas del campo, para quienes se hace imposible acceder a una alimentación adecuada. En los últimos años⁽⁶⁾ el éxodo rural-urbano anual es de aproximadamente 90.000 personas (unas 18.000 familias⁽⁷⁾). Éstas se instalan en la periferia de algún centro urbano, en pequeños lotes que no les ofrecen posibilidad alguna de producir alimentos. La escasa formación que tienen y el saturado mercado de trabajo urbano les impide acceder a bienes y servicios básicos. Así, van creando estrategias de supervivencia sin asistencia alguna del Estado. Los campesinos que quedan en el campo se enfrentan al constante deterioro del medio ambiente, a la destrucción de sus plantaciones y a la intoxicación directa, todo causado por la aplicación de potentes biocidas en los cultivos mecanizados aledaños.

La migración brasileña tuvo tres momentos importantes. Uno en la década del sesenta, otro en el setenta y el último a mediados de los años ochenta, que concuerda con la expansión de la soja en la frontera⁽⁸⁾ con Brasil. En el año 2005 entra en vigencia la ley N° 2532 que establece la zona de seguridad fronteriza de la Rca. del Paraguay, que prohíbe la venta de tierras a extranjeros a menos de 50 km de la línea fronteriza, conocida como ‘franja de seguridad’. La Comisión Interinstitucional para la Zona de

⁽⁶⁾ Según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEeC) y sus Encuestas de Hogares anuales.

⁽⁷⁾ De algo más de 240 mil familias que viven en lotes de menos de 20 has. en el país.

⁽⁸⁾ Glauser, Marcos (2010) “Extranjerización del territorio paraguayo” (Asunción: BASE IS).

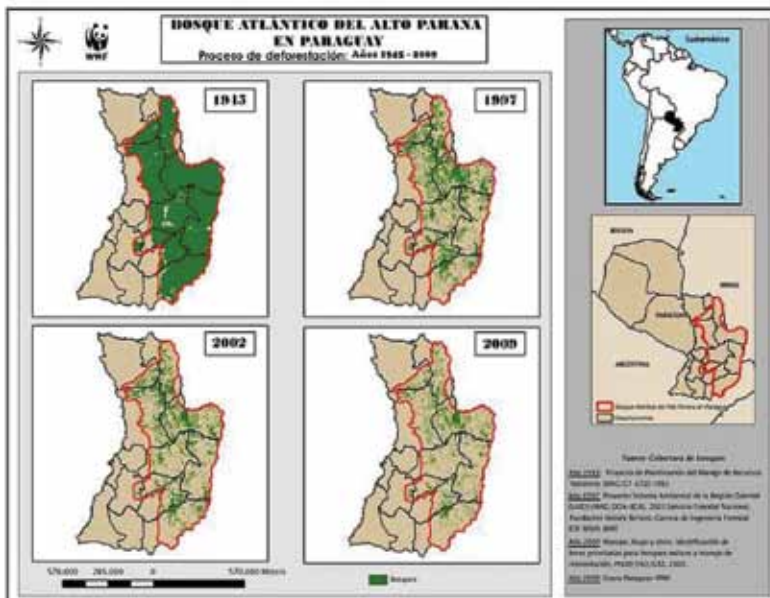


Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) realizó un relevamiento en zonas de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. De acuerdo al estudio que se hizo en el distrito de Nueva Esperanza del departamento de Canindeyú entre los años 2008 y 2009, se encontró que el 7% de los propietarios son paraguayos, el 58% son brasileños y 1% franceses; en el distrito de Katueté, el 11% son paraguayos, 83% brasileños y 1% chinos. En el último distrito, el de Francisco Caballero Álvarez, 55% son propietarios paraguayos y 42% brasileños. El promedio entre estos tres distritos limítrofes con Brasil nos muestra que el 61% de los propietarios son extranjeros, de los cuales el 90% es brasileño.

Impactos ambientales: la deforestación

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) es una de las 15 ecorregiones que conforman el gran bioma del Bosque Atlántico. Se estima que abarcaba originalmente un área de unos 470.000

Mapa 1: Deforestación por año del BAAPA



Fuente: http://www.wwf.org.py/lineas_accion/gis/tasas_y_estadisticas/

km² y se extendía desde la Serra do Mar en Brasil, hasta la provincia de Misiones en Argentina y la parte oriental del Paraguay. En 1945 el BAAPA de Paraguay cubría 8.000.000 de hectáreas de la Región Oriental; hoy se encuentra reducido a unas 700.000 hectáreas. La principal causa de la deforestación en esta región, es la expansión exponencial del cultivo de soja. En el mapa de abajo se puede observar la pérdida de bosques en la región.

En el cuadro siguiente se puede notar el nivel de tala de bosques según los departamentos afectados, que luego se convertirán en suelos para el cultivo de soja.

Deforestación por departamento

Departamento	Año 2008			Total
	Mayo	Junio	Julio	
Concepción	0	10	13	23
San Pedro	68	40	16	124
Guairá	21	0	0	21
Caaguazú	3	237	56	296
Caazapá	9	0	13	22
Itapúa	0	0	0	0
Paraguarí	0	0	0	0
Alto Paraná	21	13	0	34
Amambay	0	0	6	6
Canindeyú	41	205	258	504
Total	163	505	362	1030

Fuente: http://www.wwf.org.py/lineas_accion/gis/tasas_y_estadisticas/

Los departamentos de mayor tala (Itapúa y Alto Paraná) son las áreas donde el cultivo de soja se introdujo en la década del sesenta con la inmigración de alemanes, japoneses y brasileños. En estos lugares la “cultura de la soja” está consolidada y ya casi no existen bosques. Actualmente la mayor deforestación y amenaza de desaparición del resto de bosques es para los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Caaguazú, que son lugares de expansión, a través de empresas relacionadas principalmente a brasileños. Habría que mencionar también que la zona del BAAPA se en-

cuenta sobre el Acuífero Guaraní, el cual está amenazado por la contaminación con agrotóxicos y la depredación de los bosques.

Otro grave problema que amenaza a las comunidades campesinas, es la contaminación producida por plantaciones de especies genéticamente modificadas. La diseminación de los genes modificados mediante el proceso de reproducción de las plantas (polinización o transferencia horizontal), pone en serio riesgo la soberanía sobre el germoplasma autóctono, ya que éste adquiere características transgénicas, quedando sujeto a las leyes internacionales sobre patentes. Todo esto impide a los campesinos producir sus propias semillas y los alimentos para su subsistencia, lo cual continúa impulsando la migración rural-urbana. En general, en todas las comunidades se ha registrado un cambio fundamental en el paisaje. Según las opiniones recogidas, la deforestación masiva fue provocada por la expansión de los monocultivos y ha causado una alteración climática significativa, con oscilaciones de temperaturas más pronunciadas y un aumento de fenómenos meteorológicos extremos, tales como tornados, tormentas, inundaciones o sequías.

En las comunidades visitadas, la población asegura que en los últimos años hubo una drástica disminución de peces y animales silvestres, fundamentalmente debido a los desmontes. Así también las familias consultadas, frecuentemente hacen mención a las sequías y a la contaminación de los cauces hídricos, como origen de la desaparición de la fauna ictícola. La pérdida de bosques ha afectado la subsistencia de la población por la disminución de recursos de caza y otros, que significaban aportes para la economía familiar, tales como madera para construir, leña, hierbas medicinales, miel, etc. En la comunidad 12000 Bertoni, donde un latifundista deforestó miles de hectáreas para iniciar el cultivo de soja, un poblador comenta: “ya no hay más bosque donde cazar”. Según él, esto tiene un fuerte impacto sobre la población, ya que la caza, aparte de ser una forma de recreación para los hombres, también suponía una fuente adicional de alimentos. Por su parte, el intendente de Guayaibí denunció que “se han deforestado to-



dos los montes grandes que existían en la región, para el cultivo de soja”.

Carbón vegetal usado en Brasil incentiva la deforestación



En el departamento paraguayo de San Pedro (un departamento equivale a un estado brasileño), la industria del carbón parece estar a pleno vapor: bosques cortados, hornos pequeños y medianos frente a las casas de los agricultores locales, camiones cargados con carbón, madera tirada a orillas de la carretera esperando a que la recojan. Junto al ganado, en el pasto, un ipê-roxo (Lapacho, *Tabebuia impetiginosa*) solitario es el registro de la bella vegetación que un día existió en ese paisaje. La deforestación en grandes áreas ha sido sustituida por áreas deforestadas en las pequeñas propiedades, adaptándose a los nuevos tiempos y leyes del país.

Quien ve las casas de los campesinos, con sus montones de carbón almacenados en el terreno, se pregunta, de inmediato, cuál será el destino de tal producción. Y, al mismo tiempo, reflexiona sobre qué motiva esa cadena productiva del carbón en Paraguay. ¿Sería resultado de la situación de pobreza de los campesinos, a quienes faltan opciones? ¿O se trata de una situación estimulada por los países vecinos, en especial Brasil? Entre los camiones cargados de carbón que circulan por las carreteras de la región, hay uno que proporciona una pista interesante: ostenta banderas de Paraguay, Argentina y Brasil. Y una búsqueda entre las importaciones de productos paraguayos por empresas brasileñas revela que siderúrgicas en Brasil están importando carbón de Paraguay, sin conocer o fiscalizar prácticamente ningún aspecto –ambiental, laboral o social– referente a esa producción.

Si la situación de los campesinos es preocupante, la de los indígenas ha sido clasificada como “bastante problemática” por Nicolás Benítez, líder indígena de la Coordinación Interregional de los Pueblos Originales (Cirpo), que representa a cerca de 20 comunidades en cuatro departamentos paraguayos (Canindeyú,

Caaguazú, Guairá e Itapúa). Con problemas en las áreas de educación, salud, y tierra, y enfrentando la contaminación de sus recursos naturales por agrotóxicos, los indígenas conviven con un aumento creciente de sus problemas, incluso arrendando sus tierras a empresas vinculadas al agronegocio. Algo que la ley no permite, pero la práctica sí, según Benítez.



Camiones cargados de carbón en una carretera del departamento de Canindeyú.
Fuente: Repórter Brasil.

Los indígenas de la región venden su pequeña producción agrícola a los vehículos que pasan por la carretera, intentando llamar la atención colocando zapallos y mandiocas (yucas) a orillas de la autopista. Los hijos se aglomeran en los patios de las pequeñas casas de barro, mientras sus padres tratan de comercializar la producción sin siquiera saber utilizar el idioma español –hablan solamente el guaraní–. Un zapallo de tamaño razonable sale entre 4 mil y 5 mil guaraníes, es decir, menos de 1 dólar. Bastante cerca de allí, a la orilla de la carretera, una carga de madera aguarda para que la recojan. Parece no pertenecer a nadie, pero

es seguro que tiene un portador que debe llegar a cualquier momento (preferentemente durante la noche) para recogerla.

En ese contexto, se hace más fácil comprender la explicación de Ladislau Bernardo, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) en el departamento de Canindeyú, concedida en el terminal de ómnibus de Curuguaty, en el departamento de San Pedro. De acuerdo con Bernardo, “muchas veces, la producción de carbón termina siendo la única fuente de riqueza de los campesinos”. Una situación tan dramática que, cuando las autoridades pensaron en prohibir la producción y comercialización de carbón en la región, tuvieron como respuesta un levante de los campesinos e indígenas de la región. Frente al motín, las autoridades se echaron atrás. Y el carbón local “sigue yendo hacia Brasil y a algunas industrias en Paraguay”, de acuerdo con la confirmación del mismo Bernardo.

Según se ha investigado para este estudio, parte del carbón producido en Paraguay es adquirido por siderúrgicas brasileñas, sobre todo las localizadas en el estado de Minas Gerais, para ser utilizado como combustible en hornos de hierro gusa. El carbón también es traído por pequeñas importadoras, que después lo revenden a las siderúrgicas o a restaurantes, donde es usado en las parrillas. Entre enero y junio del 2010, Brasil importó 66 mil toneladas de carbón y productos equivalentes desde Paraguay, un aumento de 120% en relación al mismo periodo del 2009. El movimiento financiero llegó a US\$ 5,3 millones, la 11ª categoría de productos en volumen financiero. De acuerdo con un comprador de carbón de una siderúrgica de Minas Gerais, la cantidad importada podría ser hasta tres veces mayor, si no fuera la crisis por la que pasan algunas fabricantes de hierro gusa. Con foco en la exportación, algunas mantienen los hornos apagados desde el 2008, año en que se inició la crisis financiera internacional.

Grandes siderúrgicas brasileñas compran carbón vegetal en Paraguay. Es el caso, por ejemplo, de la Gerdau, una de las mayores del mundo. Cuestionada sobre cuáles parámetros socioambientales sigue al adquirir el producto, la empresa contestó: “La Gerdau aclara que realizó importaciones puntuales de carbón ve-

getal desde Paraguay, siguiendo rigurosamente la legislación ambiental vigente. La última importación del producto de Paraguay fue realizada en el 2008 por la empresa”. El carbón también es adquirido por siderúrgicas como la Mat-Prima y la Ferguminas, ambas de Divinópolis, la Cisam, de Pará de Minas, y la Ferguminas, de Itaúna –todas ciudades localizadas en Minas Gerais–. A su vez, una gran parte de las pequeñas importadoras se establecieron en los municipios de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, que tiene frontera con la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, y en los municipios de Novo Mundo, también en Mato Grosso do Sul, y Guaíra, en Paraná, ambos fronterizos con la ciudad paraguaya de Salto del Guairá.

Creada en 1993, la Mat-Prima tiene capacidad de producir 12 mil toneladas de productos siderúrgicos al mes. La mayor parte se exporta, a través de los puertos de Rio de Janeiro y de Vitória, este último en el estado de Espírito Santo. La empresa compra el producto paraguayo a través de pequeñas importadoras y también utiliza combustible brasileño fabricado en los estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso. En el caso del producto paraguayo, la Mat-Prima evalúa que cualquier control ambiental es de responsabilidad del productor y de la empresa importadora.

También fabricante de hierro gusa, la siderúrgica Cisam opera con carbón vegetal producido en Brasil y en Paraguay. De acuerdo con un representante de la empresa, el carbón es totalmente producido con madera oriunda de florestas plantadas, incluso las cargas oriundas de Paraguay. El área de reforestación localizada en Paraguay fue implantada en la ciudad de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Caazapá, y es un emprendimiento comandado por brasileños. Las siderúrgicas Ferguminas y Valinho, por su parte, actualmente tienen sus hornos apagados, a la espera de la recuperación del mercado internacional de hierro gusa. Cuando están funcionando, las dos empresas utilizan carbón fabricado en Paraguay.

Además de los problemas ambientales, sociales y laborales que se esconden tras la producción carbonera paraguaya –y traídos a Brasil por las empresas que lo importan– el carbón para-

guayo también es utilizado por los traficantes de drogas o de productos contrabandeados, como medio de introducirlos en Brasil. De acuerdo con un profesional del sector aduanero de la Policía Federal (PF) de Foz do Iguaçu (cuya identidad será preservada), “el carbón es una invitación para ese tipo de actividad, pues bloquea el scanner utilizado en la fiscalización de frontera”. Además, el carbón “perjudica el olfato de los perros, es sucio y absorbe el olor de los materiales”. Hasta algunos años atrás, el carbón entraba casi sin impuestos en Brasil, haciendo con que su precio fuera muy bajo: un camión cargado de carbón costaba 1.000 reales. Tras muchos conflictos para que el precio del carbón importado aumentara, la tonelada, que entraba a Brasil por cerca de 20 dólares, ahora tiene un costo cercano a los 100 dólares.

José Alberto Legas, jefe de la comisaría de la PF en Foz do Iguaçu, explica que es difícil establecer una relación directa entre una carga ilegal de drogas o productos contrabandeados y algún productor de soja, carbón o de otros productos provenientes de Paraguay. “Lo más común es que el dueño del producto principal ni siquiera sepa que la carga venía con la droga, siendo que en esos casos normalmente el chofer es cooptado por el esquema directamente. Pero también ocurre que el traficante compre la carga y la mezcle, haciendo un trabajo completo”. Legas agrega que los flagrantes de ese tipo ocurren como resultado de denuncias, de investigaciones, por el perfil de la carga o por el perfil de la documentación. Según él, a pesar de que es complicado señalar la relación directa entre el producto ilegal y algún productor, es cierto, por otro lado, que “los grandes traficantes normalmente poseen varias actividades legales para el lavado del dinero de la droga, del contrabando, incluso con la compra de propiedades rurales, o mediante inversiones en ganadería”. Según Legas, es muy raro encontrar cargas ilegales de soja o de carbón, pero en determinadas situaciones puede haber problemas con lo que viene camuflado en medio a esos productos, principalmente drogas y especialmente marihuana.

En Ponta-Porã, municipio de Mato Grosso do Sul que tiene frontera con Paraguay, la asesoría de prensa de la Policía Federal

afirma que es común ese tipo de flagrante de droga y carga de contrabando dentro de las cargas de carbón y de soja. Según la asesoría, se trata de un subterfugio muy utilizado por los traficantes de la región; inclusive, en una ocasión reciente, fue encontrada una carga de 11,7 toneladas de marihuana en un camión de soja. De acuerdo con el sector aduanero de la PF en Foz do Iguacu, la situación de contrabando y tráfico de drogas no se da solamente con la soja, sino también con el frijol, el maíz y otros productos agrícolas.

Contaminación por agrotóxicos a trabajadores, al agua y a la tierra

Las comunidades campesinas abordadas en un estudio realizado no hace mucho⁽⁹⁾ demuestran claramente la violación permanente a sus derechos fundamentales. Éstas se encuentran en la zona de expansión de la soja, cercana a la frontera con Brasil. La existencia de comunidades campesinas fue originada por ocupaciones de “sin tierras”. Todas ellas, con un proceso de lucha de varios años. El principal obstáculo para la permanencia de las familias campesinas es la poca tierra que tienen, ya que, en la medida que aumentan los miembros, los jóvenes en su mayoría no cuentan con tierra para permanecer en el lugar o éstas tienen un precio muy elevado que no pueden pagar —así tienden a migrar acorde con las oportunidades laborales—. En su mayoría se emplean en los campos de cultivo de soja, como fumigadores o en los silos, con posteriores problemas de salud en las vías respiratorias, debido al polvillo y a los agrotóxicos de los granos.

En la zona de dominio de la soja, las tierras campesinas generalmente están degradadas y con exigencias de insumos químicos que hace que la producción sea con altos costos, sin posibilidad de vender sus productos por la alta competencia existente con los

⁽⁹⁾ Palau, Tomás y otros (2007). “Los Refugiados del Modelo Agroexportador. Impactos del monocultivo de soja en las comunidades campesinas paraguayas”. (Asunción: BASE IS).

grandes productores sojeros, por ende, tienden a alquilar sus tierras a los mismos sojeros, obteniendo una suma que no alcanza a cubrir sus necesidades. Esta situación conduce a la penetración en la comunidad de un tipo de producción que utiliza agrotóxicos y contamina a los demás pobladores, que a la larga abandonan sus comunidades. Sin posibilidad de producir alimentos, hay el desmembramiento de la estructura familiar, la migración de los jóvenes y el aumento de la violencia. Sumado a la pérdida de fertilidad del suelo, se registra un proceso de agotamiento y contaminación de las aguas superficiales. En los pozos de las granjas, se nota una disminución de los niveles freáticos. Se reconocen fenómenos de contaminación de cauces con agrotóxicos, como desaparición y/o disminución de arroyos, por los procesos de colmatación todo debido a la deforestación de los bosques ribereños⁽¹⁰⁾.

Son cada vez más extensos, los serios problemas sociales y ambientales generados por la elevada utilización de biocidas químicos (conocidos como plaguicidas, agrotóxicos, agroquímicos o defensivos agrícolas) en zonas muy cercanas a comunidades, colonias y otros asentamientos campesinos, afectando la salud y la vida de comunidades enteras: hogares, escuelas, zonas de esparcimiento en general, cursos de agua, animales domésticos, chacras familiares y comunitarias. Muchos casos de intoxicaciones provenientes de las zonas de producción extensiva de soja, incluso la muerte de varias personas, han sido difundidos por los medios masivos de comunicación. El más conocido de todos es el de Silvino Talavera⁽¹¹⁾ ocurrido en 2003.

⁽¹⁰⁾ “Nosotros vemos las consecuencias que los agrotóxicos causan a nuestra población. A los animales, temporalmente les viene como una epidemia, llega un tiempo justamente cuando llegan los plantíos de la soja que mueren las gallinas y los patos. En el mismo momento donde se aplica el veneno se afecta a los animales y también a las personas, porque registramos varios niños con diarrea, con vómitos, también señores que ahora tienen problemas de riñones y señoras que pierden mucho a sus hijos, por lo menos en la etapa de gestación”. (Dirigente de Lote 8).

⁽¹¹⁾ La Dra. Fátima Insfrán, médica que atendió al niño antes de morir y certificó su muerte por “intoxicación de organofosforados”, relata el cuadro de síntomas



Erosión y colmatación de arroyo-Comunidad Indígena Itakty.

Fuente: Base IS.

Este es el problema que más relevancia política ha adquirido durante los últimos meses, debido a los innumerables casos reportados de manera documentada en la prensa, sobre los efectos de la mala e irresponsable utilización de potentes herbicidas e insecticidas. La situación de mayor relevancia que surge en las visitas a las comunidades en cuanto a salud, son los problemas que padece la población a causa de la contaminación por aspersión de agrotóxicos de los monocultivos de soja transgénica resistente al

que presentaba Silvino al ingresar a urgencias: “convulsiones, desmayos, fiebre de 39 grados, diarrea, deshidratación, un estado de shock muy grave que con consecutivos paros cardíacos lleva al niño a la muerte”. La doctora reforzó su testimonio con su experiencia laboral, declara que es “pediatra hace 10 años y que está en Urgencias del Hospital Regional hace muchos años y allí reciben este tipo de problemas, por lo que conoce perfectamente los síntomas que producen los organofosforados”.

glifosato. Desde el año 2000 se registró un aumento drástico en casos de intoxicaciones, con diversas denuncias en la prensa y en menor rango, en los juzgados. A causa de la magnitud del problema el Ministerio de Salud mantiene un registro sobre los casos de intoxicación aguda por plaguicidas. A partir de agosto del 2003 se incluyó la vigilancia de los casos de intoxicación por plaguicidas a la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud.

La Dra. Gamarra, Directora de este departamento, admite que el personal médico local, en general, carece de capacitación sobre agrotóxicos y desde el 2003 ha impartido cursos y seminarios en diversos puntos del país. En las entrevistas de esta investigación, en general las enfermeras y doctores admiten que a pesar de ser un problema extendido en la población rural, ellos no tienen suficientes conocimientos ni recursos médicos para poder llevar a cabo los tratamientos de desintoxicación. Sin embargo, el tema de las intoxicaciones debido a las fumigaciones de los monocultivos, se revela como una problemática ignorada por la mayoría de los funcionarios públicos.

La misma situación se repite en el municipio de Minga Porá, mientras que en la Secretaría de la Intendencia informan “que hay denuncias, pero son casos muy aislados”, y la razón que se aporta es que “la densidad de la población no es tanta como para que se den casos”. La doctora del Centro de Salud declara que las fumigaciones son “un eterno problema, porque de un lado hay viviendas y del otro plantación (...) los vecinos siempre reclaman pero no hay solución (...) ya hicieron muchas denuncias pero no les hacen caso”. En relación a las denuncias, en la mayor parte de los casos los pobladores no reciben respuesta por parte de las autoridades. En las entrevistas se revela que el boom de la soja después del año 2000 implicó un aumento de las fumigaciones y esto disparó las denuncias y acciones de la población. En la actualidad, en algunas comunidades la situación se mantiene igual que antes y en otras ha mejorado sutilmente.

Los problemas de salud más frecuentes en las comunidades parecieran estar relacionados con las fumigaciones y delatan sín-

tomas de intoxicaciones crónicas, tales como afecciones en el aparato respiratorio y el digestivo y dolores de cabeza. El 78% de las familias con las que se habló, informó acerca de algún problema de salud ocasionado por las frecuentes fumigaciones. Esto da un promedio de algo más de dos afectados por familia. Las dolencias se refieren a problemas que tienen que ver con el sistema digestivo, dolores de cabeza, jaquecas, mareos y desmayos, entre otros.

La mayoría de las autoridades sin embargo están cooptadas: en entrevistas en el distrito de Vaquería, el ex intendente llega a preguntarse: “¿Habría problemas de salud en el distrito por la fumigación? Nadie ha dicho nada hasta ahora, a mí personalmente nadie se me acercó y me dijo: -Esto me pasó por esta causa”. Mientras que los dirigentes de Mbokaja’i declaran que han realizado muchas denuncias al Intendente, al Fiscal, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Comisión de Derechos Humanos, con relación a la contaminación con pesticidas y que a pesar de haber venido otras autoridades de nivel nacional, no hubo respuestas por parte de las instituciones, y las fumigaciones continuaron.

La contaminación de los cauces de agua con agrotóxicos, es un tema recurrentes. En las comunidades de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú se menciona el lavado de los tanques en los arroyos con la consecuente contaminación. Así también en varias comunidades se menciona el hallazgo de envases usados en los arroyos. Para el conjunto de las ocho comunidades con quienes se habló, el 80,7% de la población asegura que las fuentes de agua de su comunidad están con alguna frecuencia contaminadas. El 44,4% dice que la contaminación de estas aguas es permanente.

En la comunidad de San Isidro, los dirigentes dan un informe muy pesimista de la accesibilidad a fuentes de agua: “Desde que comenzó el fenómeno de la soja en la zona, se secaron los humedales donde había depósitos de agua. Se terminó porque se tenía que plantar soja, y se secaron las nacientes chiquitas que alimentaban los humedales. Ya no hay más agua y las condiciones son muy duras, es un proceso de desertización. El arroyo que cruza por el medio a la comunidad, antes era un lugar de recreación y

pesca, ahora nadie se puede bañar por los venenos y no quedan pescados”.

Violación a los derechos de los trabajadores y de los indígenas por el agronegocio

Según lo comprobado en las comunidades, la producción de soja a largo plazo ha producido un estado generalizado de endeudamiento. La producción mecanizada acentúa las diferencias de rendimiento entre las familias vecinas y consecuentemente genera competitividad entre los campesinos. Además, el cultivo mecanizado, al requerir menos mano de obra en la propia chacra, pareciera alterar los vínculos familiares y sociales. Todos estos impactos fuerzan a los campesinos a la búsqueda de empleo fuera de la comunidad, donde se enfrentan a la alta tasa de desempleo rural. Así pareciera destruirse paulatinamente la cohesión comunitaria, con el resultado a largo plazo del aumento en la propensión a migrar a la ciudad, o a otras zonas rurales más marginales.


La comunidad de Parirí (Vaquería) es un perfecto caso de estudio sobre el impacto y la fragmentación que implica la expansión del monocultivo de soja. Esta comunidad se inició a fines de la década de los 60, llegó a tener una población de 130 familias a fines de los años 80, pero en la actualidad viven ahí sólo 39, debido a la venta de tierras. La mayoría de los pobladores tiene por lo menos un campo de soja al lado de su vivienda, dado que los productores no sólo cultivan en tierras compradas, algunas con títulos y otras solamente con derecheras, sino también en parcelas que les alquilan a los pobladores de la comunidad.

Otro factor a considerar es la dependencia creciente de ingresos por trabajo asalariado que afecta a familias rurales, campesinas e indígenas, ante la baja productividad de las chacras familiares y/o comunitarias. Ello obliga a los hombres de las familias a aceptar cualquier tipo de trabajo, en las condiciones que impongan los patrones de las explotaciones agroganaderas, las cuales incluyen no sólo labores cada vez más esporádicas, con pagos por debajo del mínimo legal, sino inclusive, sistemas de cuasi

servidumbre, como el pago del salario en vales a ser canjeados en un comercio, lo cual se encuentra expresamente prohibido en el Código Laboral vigente. Los jornaleros, campesinos e indígenas, carecen de seguridad social siendo manifiesta la falta de cumplimiento del Estado de su deber de inspección de las condiciones de trabajo de estos sectores de la población.

“En cuanto al trabajo esclavo, hay trabajadores en situación semejante a las constatadas en Brasil, de trabajo degradante, de servidumbre por deudas”, afirma Elvio Trinidad, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y representante del MCP en la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones Campesinas (MCNOC). “Son trabajadores que no tienen consciencia de sus derechos, que no tienen alternativa, que se encuentran en situación muy difícil”, dice Trinidad. Según él, los niños son muy explotados –y muy tempranamente– en el campo. “Es un problema grave, ellos dejan de estudiar y terminan en las calles de Asunción”. Según Trinidad, la mayoría de los niños llega del campo, y “la comunidad indígena es la que está más a la deriva: no poseen casa, escuela, condiciones mínimas. Están en una situación muy difícil”, ampliando el contingente de marginados que llegan a las calles de Asunción, la capital.

Luis Aguayo, secretario general de la MCNOC, confirma que “el trabajo de los niños en el campo, en Paraguay, es algo muy natural, casi cultural, en casi todas las regiones y junto a casi todos los trabajadores”. Según Bernardo Puente, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Paraguay, esa institución no posee informaciones de que exista trabajo infantil en la soja, incluso porque ese es un cultivo muy mecanizado. En lo que se refiere a los relatos de entrevistados de que existe una fuerte explotación –llegando, incluso, al punto de esclavitud– de la mano de obra indígena en la producción de la soja paraguaya en algunas regiones del país, Puente afirma que no posee ninguna información en ese sentido. Pero destaca que la soja ha avanzado sobre las tierras de las comunidades indígenas, y que, además, ha contaminado los recursos naturales, expulsando indígenas hacia



las ciudades, donde pasan a ser víctimas de las redes de explotación del trabajo.

El dirigente de la OIT agrega que actualmente Paraguay ya cuenta con una comisión nacional de combate al trabajo forzoso (como es llamado el trabajo esclavo en los demás países de América del Sur, fuera de Brasil). “Estamos trabajando acentuadamente con esa cuestión en la región del Chaco paraguayo, puesto que existen evidencias de que eso existe en el área”. Según Puente, la OIT también tiene evidencias de que en el departamento de Amambay integrantes de la etnia Pai Tavyterã se encuentran presos en haciendas de la región por estancieros brasileños, a través de mecanismos semejantes al del trabajo esclavo en Brasil. Para enfrentar los problemas en el terreno laboral que involucran a niños e indígenas, además del trabajo esclavo, hoy Paraguay cuenta con dos proyectos de cooperación Sur-Sur, en los cuales Brasil está implicado.

La cuestión de la fiscalización de las condiciones de trabajo en Paraguay es, actualmente, un tema de destaque en la agenda local, lo que, sin embargo, se resiente del hecho de que el Estado aún presenta debilidades en ese sector. Operaciones han sido hechas en el país para que la agenda del trabajo decente se haga efectiva localmente, así como para que se enfrenten los problemas relacionados al trabajo infantil y al trabajo esclavo. Tales operaciones han sido realizadas tanto en el caso de las estancias del Chaco, como en la extracción de calcárea, en el sector de la producción de ladrillos, entre otros. De acuerdo con Puente, existen evidencias bastante fuertes de la participación de empresas brasileñas en los problemas relacionados a los derechos laborales en Paraguay, cuyos impactos y responsabilidades se están investigando por parte de las instituciones locales.

Un aspecto que dificulta mucho el combate a la superexplotación de los trabajadores paraguayos es que, mientras en Brasil existen muchos trabajadores asalariados en el campo, en Paraguay eso no es una realidad. Además, “no existen sindicatos de trabajadores rurales como en Brasil”, según explica Odilón Espínola, secretario general de la Federación Nacional Campesina

(FNC). Luis Aguayo, de la MCNOC, explica que en la década de 1980 se intentó implementar sindicatos de trabajadores rurales en la región de Colonia Iguazu, en Alto Paraná, “pero actualmente eso no existe”.

La situación de los indígenas es aún más difícil, ya que la deforestación y contaminación producidas por el modelo agrícola predominante, exterminan en cantidad, diversidad y calidad, la fauna y flora silvestres, fuente principal de alimentos para estas comunidades. El cumplimiento de la escasa legislación nacional sobre la materia no es fiscalizado por el Estado. La no protección de las fuentes tradicionales de abastecimiento alimentario de campesinos e indígenas significa una renuncia al deber de proteger el derecho a la alimentación de los mismos.

La situación de los indígenas se muestra aún más difícil, ya que la deforestación y contaminación producidas por el modelo agrícola predominante exterminan en cantidad, diversidad y calidad, la fauna y flora silvestres, fuente principal de alimentos para estas comunidades. En la Región Oriental, las comunidades se han convertido en islas rodeadas de cultivos mecanizados y sufren el impacto directo del uso indiscriminado de agrotóxicos. Sus arroyos están colmatados y sus fuentes de agua contaminadas. Los cultivos transgénicos están poniendo en jaque las variedades locales, genéticamente mejor adaptadas, así como todas las dimensiones sociales, culturales y espirituales asociadas a los sistemas agrícolas tradicionales.

Con su territorio tradicional privatizado, tienen prohibido el acceso para realizar sus actividades de subsistencia tradicionales. Esta falta de protección en sus derechos de propiedad y posesión, genera el desplazamiento hacia las ciudades. A su vez, dentro de las comunidades indígenas se ha observado una situación de mayor vulnerabilidad de niñas/os y mujeres. Inclusive, por la pobreza extrema y la exclusión social en que se encuentran muchas de estas familias, se empiezan a observar prácticas de vulneración del derecho a la autonomía sexual de adolescentes indígenas menores de edad, respecto de las cuales se tolera un relacionamien-

to de índole sexual con trabajadores extranjeros de las empresas agroganaderas circundantes.

El cumplimiento de la escasa legislación nacional sobre la materia no es fiscalizado por el Estado. Recordemos que Paraguay es uno de los pocos países de la región con dos sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La no protección de las fuentes tradicionales de abastecimiento alimentario de campesinos e indígenas significa una renuncia al deber de proteger el derecho a la alimentación.

El caso de los indígenas de Campo Agua'ê

La comunidad indígena Campo Agua'ê se encuentra ubicada en el departamento de Canindeyú, distrito de Curuguaty. El centro de la comunidad se sitúa a tres kilómetros de la Ruta 10, a la altura del kilómetro 25. Varios grupos familiares del pueblo Ava Guaraní, relacionados entre sí por lazos de parentesco, constituyen la comunidad. Según estiman los pobladores/as, existirían aproximadamente en la actualidad cien familias, unas quinientas personas. Como resultado de décadas de resistencia y lucha, la comunidad logró que se le reconozcan legalmente 980 hectáreas de tierra, sólo una parte del antiguo tekoha ava-katuete, territorio que históricamente les pertenecía. Ocupando gran parte de este territorio histórico y rodeando por completo a la comunidad actual, se encuentran las empresas Nueva Esperanza S.A., de capital árabe-brasileño y Hacienda Paraguay, de capital brasileño. Éstas se dedicaron a la explotación ganadera desde mediados de los años setenta, y en forma más reciente, a cultivos intensivos de soja, sorgo y maíz.

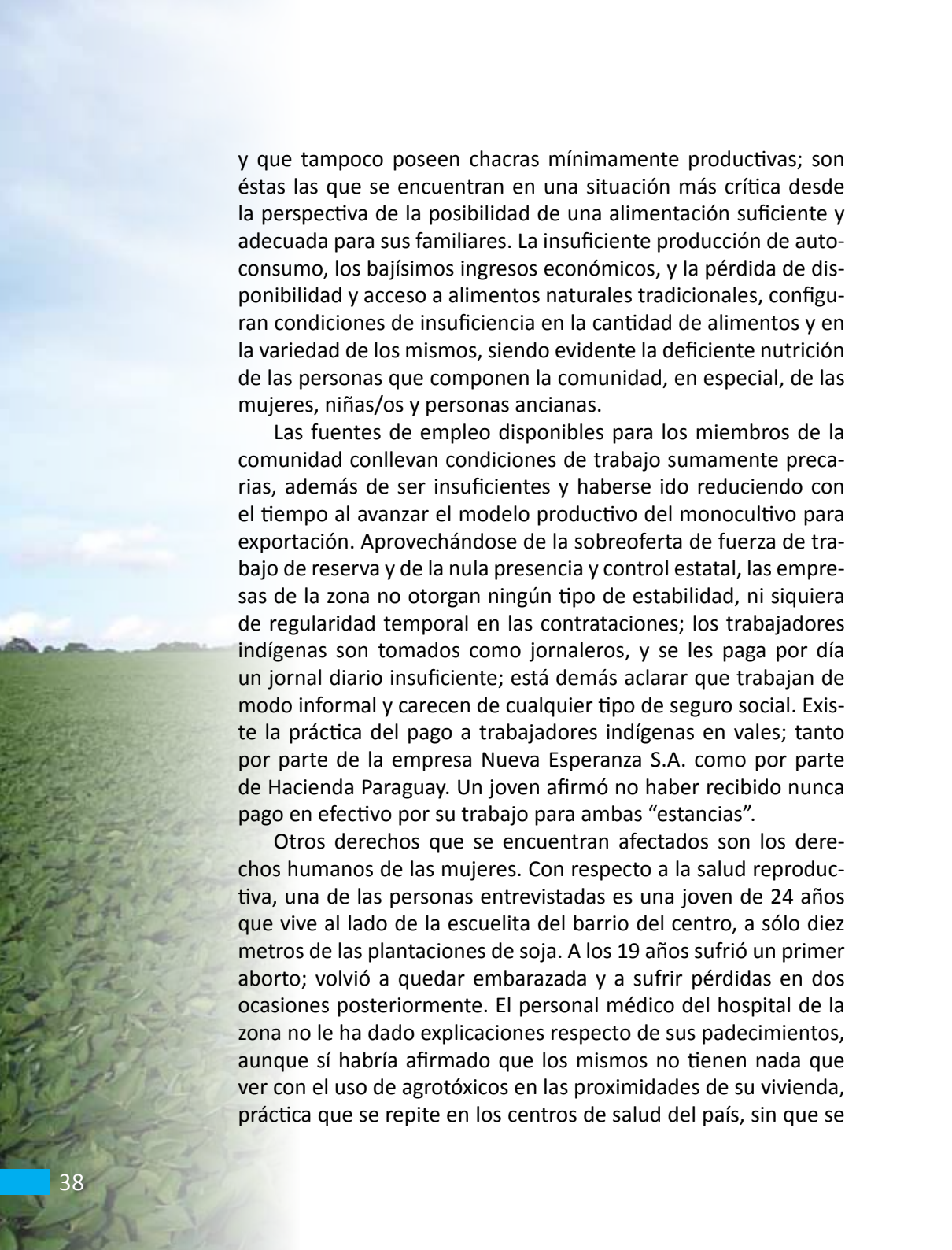
La afectación de los derechos humanos de su población sufrió un mayor menoscabo con el avance de las mencionadas empresas hasta el mismo centro de sus territorios, privándoles del acceso a extensos bosques y bienes naturales a los que acostumbraban recurrir por generaciones, además de agudizarse el hostigamiento violento hacia las familias buscando forzar su desplazamiento del lugar. A ello se debe sumar la ausencia de políticas estatales

para mejorar las condiciones de subsistencia de la comunidad, y la complicidad de las autoridades estatales en la violación manifiesta de los derechos elementales de las personas pobladoras de Campo Agua'ë.

El uso de agrotóxicos en las estancias colindantes contamina las fuentes de agua que consumen las familias indígenas, pudiendo presumirse la presencia de organoclorados en dichas aguas. Las personas entrevistadas manifestaron que el agua es peligrosa después de cada fumigación; muchas tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago y vómitos, especialmente los niños/as. A su vez, la alimentación de los miembros de la comunidad de Campo Agua'ë se ha visto afectada directamente como resultado de las actividades de las empresas que vienen operando en torno suyo. El agresivo desmonte de las tierras para su explotación agrícola y las restricciones para acceder a importantes recursos alimentarios naturales impuestas por las empresas, atentan contra las posibilidades de la comunidad de alimentarse según sus patrones tradicionales.

La fumigación de las plantaciones de soja colindantes ha provocado la destrucción de cultivos de la comunidad y la muerte de algunos de sus animales de cría. El desmonte de los alrededores hasta la casi extinción del bosque ha eliminado una gran variedad de frutas y animales de la dieta tradicional, y con ello desaparecen importantes fuentes de calorías, proteínas y nutrientes. La contaminación con agrotóxicos de los ríos pone en cuestión la inocuidad de los peces como alimento. El acceso a estos recursos alimentarios reducidos es adicionalmente limitado por la presencia de personal de seguridad de las estancias. Estos procesos atentan contra las posibilidades de la comunidad de desarrollar su forma de vida tradicional, dado que la pérdida de comidas tradicionales conlleva la pérdida de prácticas y conocimientos que forman parte de su acervo cultural.

Por la escasez de ingresos económicos, las familias difícilmente pueden compensar la pérdida de fuentes alimentarias tradicionales con la compra de alimentos en el mercado. Existen familias que no tienen miembros con algún tipo de trabajo asalariado,



y que tampoco poseen chacras mínimamente productivas; son éstas las que se encuentran en una situación más crítica desde la perspectiva de la posibilidad de una alimentación suficiente y adecuada para sus familiares. La insuficiente producción de autoconsumo, los bajísimos ingresos económicos, y la pérdida de disponibilidad y acceso a alimentos naturales tradicionales, configuran condiciones de insuficiencia en la cantidad de alimentos y en la variedad de los mismos, siendo evidente la deficiente nutrición de las personas que componen la comunidad, en especial, de las mujeres, niñas/os y personas ancianas.

Las fuentes de empleo disponibles para los miembros de la comunidad conllevan condiciones de trabajo sumamente precarias, además de ser insuficientes y haberse ido reduciendo con el tiempo al avanzar el modelo productivo del monocultivo para exportación. Aprovechándose de la sobreoferta de fuerza de trabajo de reserva y de la nula presencia y control estatal, las empresas de la zona no otorgan ningún tipo de estabilidad, ni siquiera de regularidad temporal en las contrataciones; los trabajadores indígenas son tomados como jornaleros, y se les paga por día un jornal diario insuficiente; está demás aclarar que trabajan de modo informal y carecen de cualquier tipo de seguro social. Existe la práctica del pago a trabajadores indígenas en vales; tanto por parte de la empresa Nueva Esperanza S.A. como por parte de Hacienda Paraguay. Un joven afirmó no haber recibido nunca pago en efectivo por su trabajo para ambas “estancias”.

Otros derechos que se encuentran afectados son los derechos humanos de las mujeres. Con respecto a la salud reproductiva, una de las personas entrevistadas es una joven de 24 años que vive al lado de la escuelita del barrio del centro, a sólo diez metros de las plantaciones de soja. A los 19 años sufrió un primer aborto; volvió a quedar embarazada y a sufrir pérdidas en dos ocasiones posteriormente. El personal médico del hospital de la zona no le ha dado explicaciones respecto de sus padecimientos, aunque sí habría afirmado que los mismos no tienen nada que ver con el uso de agrotóxicos en las proximidades de su vivienda, práctica que se repite en los centros de salud del país, sin que se


realicen los estudios mínimos correspondientes para descartar tal supuesto.

Otro derecho que se observó estar en peligro de vulneración es el derecho a la autonomía sexual de las mujeres de la comunidad, en particular de las adolescentes y jóvenes. Por la situación de extrema necesidad en la que se encuentran las familias, se corre el riesgo de que se extienda la práctica de permitir relaciones de índole sexual entre adolescentes menores de edad y trabajadores de las estancias aledañas, de edad avanzada y nacionalidad brasileña, pero con más medios económicos que las familias indígenas.

La comunidad carece de energía eléctrica, agua potable, servicios de saneamiento, puesto de salud; si alguna persona se enferma, la farmacia más cercana se encuentra a siete kilómetros y debe pagarse todo al contado. El hospital más cercano queda en la ciudad de Curuguaty. No cuentan con servicios de ambulancias; por ello cuando hay urgencias deben solicitar ayuda a las estancias Nueva Esperanza o Hacienda Paraguay. Respecto al derecho que tienen las comunidades indígenas de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones que les afectarán, las personas entrevistadas manifestaron que no recuerdan haber recibido nunca a ninguna autoridad pública, ni siquiera del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que se reuniera con las familias o con sus representantes en la comunidad, para informar o discutir sobre temas que les atañen.

El 19 de octubre de 2009 representantes de la comunidad Campo Agua'ẽ presentaron una denuncia contra las empresas colindantes, por el uso indiscriminado de agrotóxicos, que estaba afectando severamente la salud de los miembros de su comunidad. La denuncia fue realizada ante la Unidad Penal Nº 1 y Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, Canindeyú. En fecha 24 de mayo de 2010, siete meses después de efectuada la denuncia, accedimos a la carpeta fiscal de la causa⁽¹²⁾. En ese momento la misma contaba con

⁽¹²⁾ Carpeta Fiscal Nº 1303/2009, caratulada como "Averiguación de supuesto



sólo ocho páginas, pese a que la agente fiscal interviniente había constatado que los hechos que se denunciaban eran ciertos, que existían explotaciones intensivas de soja que llegaban hasta diez metros de la escuelita, y de las viviendas de la comunidad indígena, sin ningún tipo de barrera ambiental, conforme lo asentado en dos actas de constitución en el lugar de los hechos.

La última actuación que existía en la Causa 1303/2009, era la declaración testifical de fecha 1º de diciembre de 2009, del capataz de una de las empresas denunciadas. El mismo, de nacionalidad brasileña, declaró que la estancia es propiedad de Sebastian Newson Mendez, domiciliado en Paraná, Brasil. El empleado sostuvo que desde hace tres años se dedican al cultivo intensivo de soja y que él no sabía que se necesitaba barrera de protección hacia el lado donde la “Colonia Indígena” linda con los cultivos. Ninguna otra actuación fue hecha por la fiscalía competente en la causa. No se exigió la comparecencia del propietario individualizado, no se pidieron informes para identificar las fincas en las que se estaban produciendo los delitos, no se interrogó a los propietarios para saber si cuentan con la debida licencia ambiental; no se ordenó ningún tipo de pericia, no se imputó a los responsables de los establecimientos, ni se solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la salud de las víctimas.

En un caso de tamaña gravedad donde se encuentra comprometida la salud y la integridad física de centenares de personas, entre ellas la de cientos de niñas y niños; en el que se encuentra comprometido el medio ambiente y la calidad de vida humana; ante una denuncia expresa realizada por representantes de una comunidad indígena respecto de cuyos pueblos la Constitución Nacional encomienda especialmente al Ministerio Público velar, reconociendo la situación de vulnerabilidad en que éstos se encuentran en el Paraguay; los agentes fiscales competentes, incluso habiendo constatado la existencia flagrante de delitos ambientales, no hicieron absolutamente nada por proteger los derechos de las personas afectadas y de la comunidad indígena

Hecho Punible c/ el Medio Ambiente – Uso irregular de Agroquímico”.

en su conjunto. Dicha inacción por siete meses, implica no sólo un mal desempeño de funciones, implica también el encubrimiento por parte del Ministerio Público, de los perpetradores de estos hechos punibles.

El incumplimiento del Estado de su deber de protección de la comunidad en cuanto a sus derechos humanos a vivir en un ambiente saludable, a la alimentación y al agua, adquiriría las características, ya no de una omisión generalizada, sino de una co-participación en la violación de estos derechos, como es evidente en el tratamiento dado por la Fiscalía Penal competente a la denuncia arriba mencionada. Existe en la zona un patrón de impunidad que posibilita que los responsables de establecimientos agrícolas y ganaderos actúen con un absoluto desprecio de las normas legales vigentes en el país y de los derechos de las comunidades cercadas por los mismos. Daría la impresión de que el objetivo implícito es la expulsión forzada de dichas comunidades de sus territorios, para permitir el avance del capital, ya sin los “inconvenientes” que pudiera representar la existencia de poblaciones en medio de las explotaciones.

La situación en que se encuentran las personas que integran la comunidad indígena Campo Agua'ê responde a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos elementales por parte del Estado, desde hace décadas y hasta la actualidad. Se trata de un esquema de actuación estatal, a través de sus órganos ejecutivo, legislativo y judicial, que se caracteriza por el desconocimiento práctico de los derechos colectivos que corresponden a las comunidades indígenas, y los derechos individuales de los cuales son portadores sus integrantes.

Conflictos agrarios generados por la expansión de la soja

La violación a los Derechos Humanos fue constante durante 2008 y 2009, principalmente en el acceso a la alimentación, la vivienda y la tierra. Esto ocurre en los departamentos donde la producción de soja se halla en expansión. El alto índice de atropes-

llo se da preferentemente en las comunidades campesinas e indígenas. En el siguiente cuadro se puede observar que Alto Paraná y Canindeyú (límitrofes con Brasil) llevan la delantera, suman 208 los imputados en dos años, y son precisamente los departamentos con mayor presencia de extranjeros.

Imputación por año y departamento

Año	Concepción	San Pedro	Alto Paraná	Canindeyú	Capital	Total
2008	3	18	128	73	18	240
2009	93	7	7	0	0	107
Total	96	25	135	73	18	347

Fuente: Boletín Derechos Humanos y Agronegocios (2009) N° 1.

En el cuadro de abajo se puede apreciar la cantidad de personas detenidas, que corresponde mayormente a dirigentes sociales, cuya intención es mantener la resistencia que las organizaciones realizan ante el avance de los agronegocios. De nuevo aparecen los dos departamentos con mayor presencia de producción de soja. En tanto, Concepción y San Pedro juntos, suman 393 personas que fueron detenidas. Esto es debido al nivel de organización y resistencia frente a los atropellos de los productores sojeros.

Personas detenidas por año y departamento

Año	Concepción	San Pedro	Caaguazú	Caazapá	Alto Paraná	Canindeyú	Capital	Total
2008	56	83	55	90	186	87		557
2009	94	160	0		7		1	262
Total	150	243	55	90	193	87	1	819

Fuente: ídem.

Por otro lado, se observa en el cuadro siguiente que en el periodo de relevamiento, los desalojos de los asentamientos o lotes ocupados por las organizaciones campesinas, también tuvo su

impacto en los departamentos fronterizos con Brasil. Es decir, sigue la misma línea que en los demás cuadros, concentrándose en Alto Paraná y Canindeyú, con la observación que el departamento de San Pedro suma 14 desalojos en el periodo analizado. En resumen, todas las violaciones que ocurrieron en este periodo, son consecuencia de la expansión de la soja en la zona.

Cantidad de desalojos por año y departamento


Año	Concepción	San Pedro	Caaguazú	Caazapá	Alto Paraná	Canindeyú	Capital	Total
2008	1	6	4	1	12	2	7	34
2009	2	8	1	1	3	2	1	18
Total	3	14	5	2	15	4	8	52

Fuente: Ídem.

Soja concentra tierra en Paraguay y en Brasil

Sea en Paraguay o en Brasil, los censos agropecuarios han confirmado la relación de causa y efecto entre la expansión del cultivo de soja y la concentración fundiaria. De acuerdo con el sociólogo paraguayo Marcos Castilho, que realizó un estudio sobre los impactos de la soja en su país –con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y de la Base Investigaciones Sociales– los datos del censo del 2008, el último disponible, señalan que existen sólo 703 sojicultores que poseen propiedades con más de mil hectáreas. Sumadas, esas haciendas llegan a tener 1,1 millón de hectáreas, cerca de 50% del total de área de soja de Paraguay y un 35% del área de todos los cultivos de ese país.

Para Castilho, el cultivo de la soja puede ser interpretado como un proceso de acumulación de capital que cobra costos de los campesinos, de la naturaleza y de los derechos de los trabajadores. “Son pocos los beneficios de ese modelo para el país. Los impuestos son bajos. En el negocio de la soja, el país entra con la tierra y con un poco de fuerza de trabajo. Y nada más. En el 2008,



el PIB paraguayo creció un 6%, cifra de la cual cuatro puntos porcentuales tuvieron origen en las exportaciones del agronegocio.

Pero esta es una riqueza que no se divide con el pueblo”, afirma el sociólogo. Al analizar los datos del censo, Castilho detalló cómo la soja se transformó en protagonista en el proceso de concentración fundiaria del país. Entre 1991 y el 2008, el número de productores de ese grano aumentó sólo un 3,8%, llegando a 27.735. Pese a ello, el área cultivada de soja aumentó un 345%, llegando a las 2,4 millones de hectáreas, estando un 48% de ellas distribuidas entre propiedades mayores de mil hectáreas y un 41% en tierras de entre cien y mil hectáreas.

Mostrando la concentración fundiaria, también entre 1998 y el 2008 el número total de propiedades rurales paraguayas cayó un 5,7%, quedando en 289.666 unidades. El mayor retroceso ocurrió entre las pequeñas propiedades, sobre todo las de 20 a 50 hectáreas: pasaron a existir apenas 22.866 de ellas en el 2008, un 27,5% menos que en 1991. Las grandes propiedades, superiores a 500 hectáreas, registraron aumento del número de unidades: pasaron a ser 7.464, un aumento de 56,9%. La ocupación del territorio paraguayo por la agropecuaria también es revelada por los censos. En 1991, éstas ocupaban un 59% del país y en el 2008 llegaron a ser un 76% del total de tierras nacionales. Los pastos todavía ocupan la mayor parte de esa área, un 57%, mientras los cultivos ocupan un 10%, de los cuales un 73% corresponde a áreas de soja.

En el caso de Brasil, los datos del censo agropecuario del 2006, el último disponible, muestran por qué el país es reconocido como uno de los que posee una de las estructuras fundiarias más desiguales del mundo. Mientras pequeños lotes con menos de 10 hectáreas ocupaban un 2,7% del total de propiedades rurales ese año, grandes haciendas con más de mil hectáreas concentraban un 43% del total. La soja fue el cultivo que más creció en la última década, con un aumento de 88% en la producción y de un 69% en área cosechada. Eso representa una expansión de 6,4 millones de hectáreas, gran parte de ellas en el centro oeste brasileño, cerca de la frontera con Paraguay.

El grado de concentración de tierras en el país está prácticamente inalterado desde 1985 –año que marca el inicio de la redemocratización brasileña– pese a los billones que se han invertido en el programa nacional de reforma agraria. Según el censo del año 2006, el índice de Gini –indicador de la desigualdad en el campo– registra 0,854 puntos, nivel cercano a los datos verificados en las dos encuestas anteriores: 0,856 (1996) y 0,857 (1985). Mientras más cerca esa medida se encuentra del número 1, mayor es la concentración en la estructura fundiaria. Mato Grosso, estado con mayor producción de soja en el país, posee índice de desigualdad de 0,865, el segundo mayor del país.

Movimientos sociales y ONGs que actúan para denunciar los impactos

En el año 2008 se constituyó una instancia orgánica multisectorial llamada Coordinadora Nacional de Víctimas de Agrotóxicos, donde se articulan organizaciones campesinas, indígenas, barriales y entidades estatales que realizan denuncias de los atropellos que sufren las comunidades indígenas y campesinas por causa de la fumigación con agrotóxicos. Otra instancia es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), que aglutina a una veintena de organizaciones sociales e instituciones privadas encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos.

Desde esta instancia se hacen denuncias internacionales y nacionales de las violaciones a los derechos a la tierra, al alimento, a la vivienda, a los derechos sociales, políticos y culturales. BASE IS implementa actualmente un Observatorio de Derechos Humanos y Agronegocios desde 2009, cuyo resultado se publica cada tres meses, a través de un boletín. Por otro lado, en el año 2008 se presentó un estudio sobre Malformaciones Congénitas Asociadas a Agrotóxicos a cargo de la Dra. Stela Benítez Leite⁽¹³⁾ y otros.

⁽¹³⁾ Profesora Asistente de la Cátedra de Pediatría. Centro Materno Infantil (CMI). Facultad de Ciencias Médicas (FCM) Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Presionados, campesinos luchan por garantizar sobrevivencia

Los campesinos paraguayos luchan por garantizar su sobrevivencia, su modo de producción y su cultura, mientras la soja crece vertiginosamente en el país. Paraguay presenta hoy una distribución poblacional en la que cerca de un 40% de la población vive en el medio rural, y una economía en la que buena parte de las personas se sitúa en la línea de pobreza o abajo de ésta. Sin opciones en el campo, y enfrentando graves conflictos en el medio rural, miles de campesinos han migrado, año a año, hacia las mayores ciudades.

En este escenario, los movimientos sociales representativos de los campesinos han sido llevados a defender la construcción de un proyecto nacional destinado a la mayoría de los paraguayos. Un proyecto que garantice la soberanía del país frente al avance de grandes grupos del agronegocio, y que adopte como una de sus banderas centrales la realización de una verdadera reforma agraria.

“Los campesinos están siendo desterrados. No hay políticas especiales para el campo”, denuncia Magui Balbuena, de la Coordinación Nacional de las Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri). La dirigente analiza que las consecuencias del actual modelo de producción que predomina en el campo en Paraguay son cada vez más graves, y que, en la medida en que hay más soja, más campesinos sin tierras se suman a los campamentos existentes, al paso que menos tierras cultivables se encuentran disponibles para los campesinos. “Hay un empobrecimiento terrible en el campo, y migración hacia las mayores ciudades”, agrega.

Según los cálculos de la Mesa Coordinadora Nacional de las Organizaciones Campesinas (MCNOC), cerca de 100 mil personas están dejando sus tierras cada año. Del otro lado del mismo proceso, la MCNOC estima que la concentración de tierras en latifundios creció cerca de 34 veces en los últimos veinte años, principalmente sobre las comunidades y sobre las tierras indígenas. “Hay hambre, mucha hambre, por culpa de ese modelo”, afirma

Luis Aguayo, secretario general de la MCNOC, entidad que reúne a aproximadamente 27 mil familias. De acuerdo con Aguayo, cerca de 2,4 millones de paraguayos viven en la línea de pobreza y 1 millón más viven en extrema pobreza.

Según el análisis de los movimientos campesinos, la “sojización” de Paraguay, que es como ellos definen el proceso actual de avance del monocultivo de soja en el país, lleva a la profundización de la dependencia de Paraguay frente a empresas y frente a otras naciones. “Imposibilita el desarrollo industrial y con eso se acentúan los problemas sociales y económicos”, explica Odilón Espínola, secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC). Espínola agrega que la especulación alrededor de la tierra es otra consecuencia grave del actual modelo, y que los campesinos “ya no pueden pagar el precio por la tierra” o bien deciden venderla.

Mujeres en riesgo

Si la situación en el campo puede ser considerada preocupante para los campesinos paraguayos en general, hay grupos aún más vulnerables a las actuales transformaciones, y que pagan más caro frente al cuadro expuesto. Según Magui, de la Conamuri, “los problemas afectan sobre todo a las mujeres, que absorben esa situación de abandono en el campo, no poseen preparación profesional, no comprenden español y enfrentan graves consecuencias al migrar hacia las ciudades”.

La Conamuri, considerada como una de las entidades sociales más importantes de Paraguay, así como una de las más representativas de la lucha de las mujeres, señala una serie de situaciones de mayor o menor gravedad enfrentadas hoy por las mujeres en las ciudades paraguayas. Los problemas van desde la superexplotación de su trabajo a pagos miserables por su fuerza de trabajo, pero incluyen también la reducción de las mujeres a condiciones análogas a la esclavitud, así como su reclutamiento por redes de prostitución con ramificaciones en Argentina y España. “Es un problema social y también cultural, de pérdida de identidad”,

analiza Magui. “Estamos perdiendo la soberanía alimentaria, nacional y territorial”. Para ella, “los agrocombustibles agravaron los problemas”, al acentuar, en los últimos años, el crecimiento de la producción de soja en Paraguay –además de los respectivos conflictos.

La cuestión cultural citada por la dirigente de la Conamuri no es marginal o secundaria. Por el contrario: molesta y promueve transformaciones importantes en el país y en el modo y objetivos de vida de los campesinos. “Estamos muy cerca de Brasil, conviviendo con un gran número de ‘brasiguayos’, y estamos discutiendo mucho todo eso, de cómo valorizar nuestra cultura, de cómo dialogar con otras culturas sin simplemente asumirlas, muchas veces en vez de la nuestra”, cuenta Ladislau Bernardo, dirigente de la FNC en el departamento de Canindeyú.

Ladislau
Bernardo,
dirigente de
la FNC en el
departamento
de Canindeyú.
Fuente: Re-
pórter Brasil.



En Curuguaty, en el departamento de San Pedro, donde Bernardo concedió la entrevista, el sonido de los grandes y vistosos autos suena al máximo volumen en las calles y plazas locales. Recuerda, claro, la forma de “escuchar” música de algunas ciudades del interior brasileño. Y es un hábito que desagrada a muchos

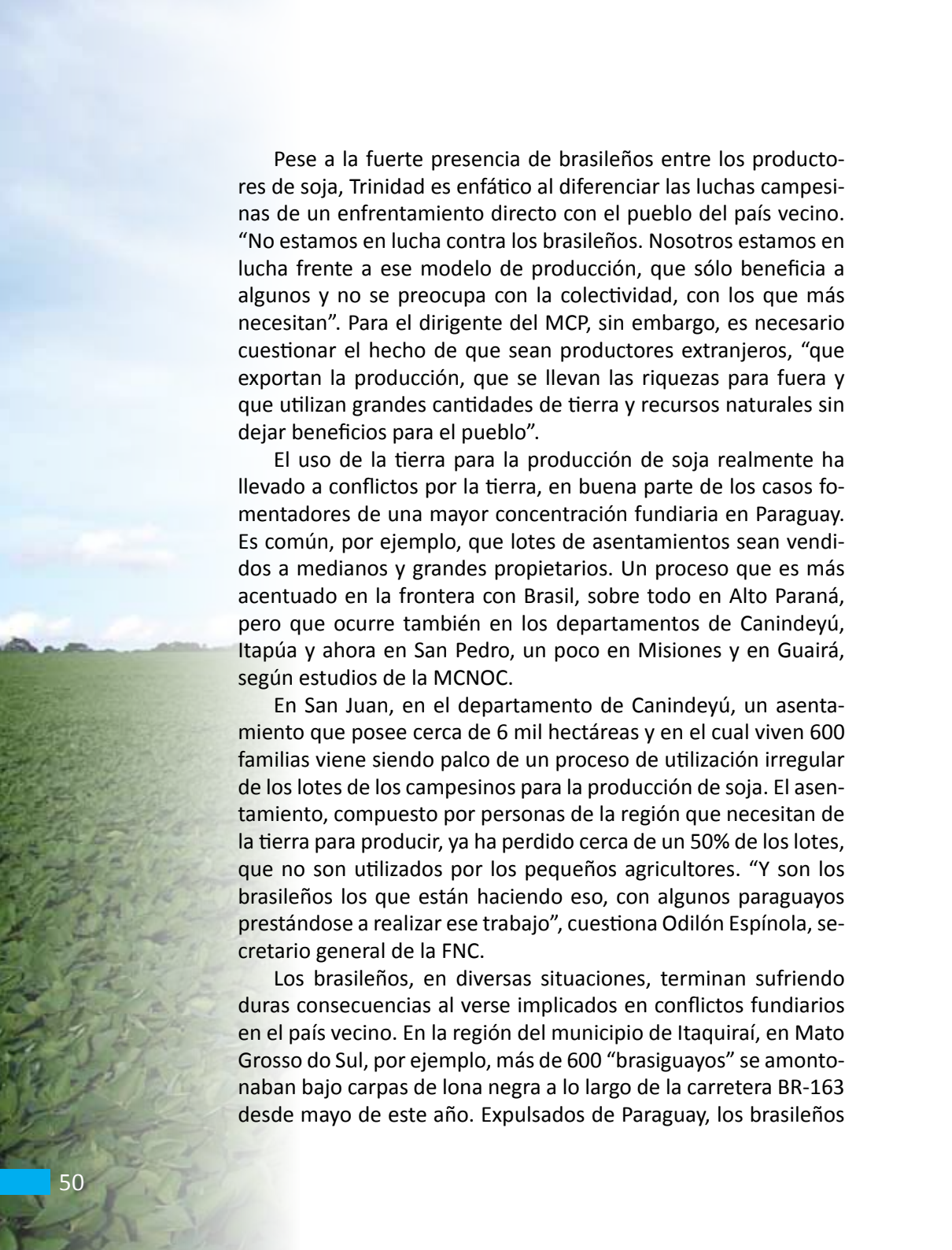
paraguayos. “Pero no hay gran cosa que hacer, no hay cómo reclamar, reaccionar”, se resigna el dirigente de la FNC.

Bernardo recurre a la Constitución Nacional, para recordar que ésta “determina lo que los extranjeros pueden hacer, y lo que está ocurriendo no está de acuerdo con la Constitución”. Los conflictos involucrando a brasileños y campesinos son diversos y Bernardo afirma que hay muchas acciones de los brasileños que son contrarias a los campesinos. “Hay ‘brasiguayos’ que actúan con mucha prepotencia y violencia. Tuvimos casos hasta de secuestro de hijos de campesinos para que desistamos de luchar”.

Asentamientos en disputa

Paraguay ha experimentado una importante transformación en la distribución de su población a lo largo de las últimas décadas, cuando buena parte de la población dejó el campo rumbo a las ciudades. Según Elvio Trinidad, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), entidad que reúne a 14 mil familias campesinas, entre un 70% y un 75% de la población vivía en el medio rural hasta la década de 1960. Actualmente, según el censo agrícola más reciente, cerca de un 43% de la población aún vive en el campo. La población rural, por lo tanto, representa algo cercano a los 2,2 millones de paraguayos. Personas que viven, en gran medida, directamente de la agricultura.

De acuerdo con Trinidad, “hoy tenemos de 300 mil a 500 mil campesinos que no poseen tierra para producir”. Además de la migración hacia las ciudades, donde no todos encuentran empleo —en Asunción, por ejemplo, hay innumerables personas sobreviviendo de pequeños trabajos, empleos informales o, simplemente, ganándose la vida como mendigos o limpiando vidrios de autos en los semáforos—. Así, mucha gente ha optado incluso por salir del país. “La tierra, que anteriormente estaba con la comunidad campesina, ahora está bajo control de los sojeros”, denuncia Trinidad. El proceso de crecimiento de la soja empezó durante la dictadura, acentuándose con la creciente llegada de empresas brasileñas en las últimas décadas.



Pese a la fuerte presencia de brasileños entre los productores de soja, Trinidad es enfático al diferenciar las luchas campesinas de un enfrentamiento directo con el pueblo del país vecino. “No estamos en lucha contra los brasileños. Nosotros estamos en lucha frente a ese modelo de producción, que sólo beneficia a algunos y no se preocupa con la colectividad, con los que más necesitan”. Para el dirigente del MCP, sin embargo, es necesario cuestionar el hecho de que sean productores extranjeros, “que exportan la producción, que se llevan las riquezas para fuera y que utilizan grandes cantidades de tierra y recursos naturales sin dejar beneficios para el pueblo”.

El uso de la tierra para la producción de soja realmente ha llevado a conflictos por la tierra, en buena parte de los casos fomentadores de una mayor concentración fundiaria en Paraguay. Es común, por ejemplo, que lotes de asentamientos sean vendidos a medianos y grandes propietarios. Un proceso que es más acentuado en la frontera con Brasil, sobre todo en Alto Paraná, pero que ocurre también en los departamentos de Canindeyú, Itapúa y ahora en San Pedro, un poco en Misiones y en Guairá, según estudios de la MCNOC.

En San Juan, en el departamento de Canindeyú, un asentamiento que posee cerca de 6 mil hectáreas y en el cual viven 600 familias viene siendo palco de un proceso de utilización irregular de los lotes de los campesinos para la producción de soja. El asentamiento, compuesto por personas de la región que necesitan de la tierra para producir, ya ha perdido cerca de un 50% de los lotes, que no son utilizados por los pequeños agricultores. “Y son los brasileños los que están haciendo eso, con algunos paraguayos prestándose a realizar ese trabajo”, cuestiona Odilón Espínola, secretario general de la FNC.

Los brasileños, en diversas situaciones, terminan sufriendo duras consecuencias al verse implicados en conflictos fundiarios en el país vecino. En la región del municipio de Itaquiraí, en Mato Grosso do Sul, por ejemplo, más de 600 “brasiguayos” se amontonaban bajo carpas de lona negra a lo largo de la carretera BR-163 desde mayo de este año. Expulsados de Paraguay, los brasileños

volvieron a Brasil sin tener para dónde ir y dejando atrás lo que habían logrado construir en Paraguay. El caso, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público Federal de Mato Grosso do Sul (MPF-MS) y del Movimiento Rural de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en ese estado, es considerado por el Itamaraty como una de las situaciones más preocupantes enfrentadas por brasileños que viven fuera de Brasil.

Sin embargo, la realidad en Paraguay parece ser más compleja y delicada de lo que se puede suponer a partir de las primeras impresiones que deja ese caso. El problema de los conflictos fundiarios involucrando a brasileños alcanza desde medianos y grandes propietarios, que tuvieron que dejar sus tierras, a peones de haciendas que fueron desocupadas, pasando, además, por pequeños productores “brasiguayos” que también tenían su subsistencia en el país íntimamente vinculada a la tierra. Pero muchas tierras implicadas en los conflictos poseen problemas de titulación o fueron ocupadas de manera irregular, y son reivindicadas ahora por los paraguayos. En medio a las disputas, que salpican de manera preocupante hacia todos lados, existen incluso relatos de empresas relacionadas al agronegocio que se valen de los conflictos y de testaferros para desocupar las propiedades y después incorporarlas a sus emprendimientos de producción.

Ladislau Bernardo, de la FNC, estima que cerca de un 40% de las tierras locales están en manos de brasileños. “Hay muchas tierras a nombre de paraguayos, pero que de hecho son de los brasileños”. En el departamento de San Pedro, el asentamiento Maracañá, próximo a Curuguaty, hoy enfrenta ese asedio. Conquistado como resultado de la lucha de campesinos frente a un latifundista de la región, las tierras son blanco de la codicia y de ofertas de compra –muchas de ellas hechas por brasileños–. Por tres lotes de asentados (30 hectáreas), son ofrecidos cerca de 200 millones de guaraníes, o unos 80 mil reales. Un montante bastante razonable para los patrones paraguayos. “Después de vender esas tierras, el campesino se va a vivir a la ciudad, hasta gastar todos sus fondos y quedarse sin opciones de subsistencia”, dice Bernardo.

Resistencia campesina

En el distrito de Capiivary, departamento de San Pedro, la situación es semejante a la de Curuguaty. Los brasileños llegaron a la región recién en el 2003, después de comprar estancias de paraguayos. En esa época, aún no se plantaba soja, sino que lo que había eran pastos para el ganado y bellas florestas. Según Florencio Martínez, líder campesino local, “los brasileños trajeron su modelo de producción, usando máquinas y mucho veneno. Los pequeños productores pasaron a convivir con agua y tierra contaminadas”.

Pedro Martínez, colega de Florencio en la organización campesina local, cuenta que los cambios traídos por los brasileños crearon dificultades para que los pequeños agricultores locales siguiesen con su modo de vida. “No había cómo producir mandioca, maíz, papa y plátano como antes. Muchos ya han optado por salir de Capiivary”, recuerda él. “Era gente que poseía 10 o más hectáreas. Vendieron las tierras y se fueron a las ciudades. Pero cuando el dinero se acaba, no hay cómo vivir”.

El fin del dinero viene acompañado por otros males, tal vez incluso más graves que estar sin recursos para solventar los costos propios y con la familia para los días futuros. “Muchos terminan en la delincuencia y en la prostitución”, comenta Florencio. “Intentamos resistir. Organizamos movilizaciones, bloqueamos las carreteras y exigimos la recuperación de la tierra contaminada. Pero no contamos con el apoyo de nadie, ni del gobierno”, afirma él. Florencio afirma haber sido “secuestrado y torturado en el 2004 y el 2008, por orden de un gran productor brasileño que posee haciendas en la región”.

El campesino agrega que su caso está lejos de haber sido una excepción, un exceso por parte de las autoridades o de los grandes productores. “Muchos de nosotros fueron presos y otros han sido asesinados. Eso desmoviliza a la base”. Los Martínez estiman que hoy los latifundistas poseen 230 mil hectáreas de las 340 mil que componen el distrito de Capiivary. “Pero no vamos a desistir. Tenemos una radio comunitaria que nos ayuda a hablar con la población local. Es la Ko’erory FM”, dice Florencio, animado.



Florencio Martínez y Pedro Martínez, líderes campesinos en Capiivary. Fuente: Repórter Brasil.

Salidas y propuestas

El actual cuadro ha llevado a que las organizaciones campesinas apuesten en diversas banderas, de resistencia y de proyectos futuros. Elvio Trinidad, dirigente del MCP, explica que los movimientos están movilizados, por ejemplo, por un proyecto de ley para que la exportación de materia prima sea tarifada, dado que la soja que hoy se produce en el país cuenta con diversos incentivos fiscales y casi no paga impuestos –a pesar de que genera altísimas ganancias para los emprendedores implicados en su cadena productiva–. Las chances de aprobación en el Congreso Nacional son pequeñas, incluso por el hecho de que los campesinos cuentan con una participación débil en el Congreso, según la definición del mismo Trinidad. “Estamos, en realidad, solicitando algo muy pequeño, una pequeña parcela de la tributación de esas riquezas, pero no creemos que lo vayan a aprobar, pues la mayoría de los parlamentarios no está a favor de esos cambios ni de la reforma agraria”.

En San Pedro, un acuerdo entre el gobierno del departamento, los productores y organizaciones campesinas locales a inicios de julio, recibió destaque en los titulares de los periódicos de la región. El acuerdo, sin embargo, no contó con la participación,

por ejemplo, de la FNC, según explica Ladislau Bernardo, dirigente de la entidad en San Pedro. “No es un acuerdo con nosotros. Hay muchas organizaciones y hay visiones distintas, siendo que existen aquellos que tienen relaciones con los sojeros”, agrega, concluyendo que su organización no está de acuerdo con ese tipo de actuación de otras entidades.

La Conamuri también afirmó que desconocía los términos y la existencia del acuerdo. Y las demás organizaciones campesinas nacionales abordadas para que comentaran el acuerdo no respondieron a los pedidos de aclaraciones –pero tampoco fueron citadas en el periódico–. Ya Trinidad, sin hacer mención directa al acuerdo, insiste en subrayar que las cuestiones vinculadas a los campesinos eran anteriormente ignoradas, y que ahora al menos se encuentran en debate. El dirigente reconoce avances del gobierno Lugo también en el área de la soberanía energética (frente a Brasil y a Argentina), y destaca que buena parte de los campesinos apoya el proceso de cambios que el gobierno intenta capitanear.

Ladislau Bernardo destaca, por fin, que, “en Paraguay dependemos de la agricultura, y hace mucho tiempo que los gobiernos de turno no tienen una política de valorización de los campesinos, que es un camino fundamental para salir de la pobreza”. Para él, es necesario dar prioridad a una política agrícola, junto a una política industrial, “es de allí que vendrá el desarrollo”. La producción de algodón sería un ejemplo interesante en ese sentido, dado que puede servir como base para una industria y por haber ya representado a un sector de importante peso en la agricultura del país.

La realización de una efectiva reforma agraria, por fin, también se señala como fundamental por las organizaciones. Para Bernardo, “hay que emprender una lucha nacional. Necesitamos de un proyecto de desarrollo nacional”. Él concluye registrando que “existe mucha riqueza en Paraguay. Lo que necesitamos profundizar es su distribución”. Cualquier semejanza con lo que ocurre en el campo brasileño no será mera coincidencia.

